

47ª REUNION — CONTINUACION DE LA 1ª SESION EXTRAORDINARIA —  
DICIEMBRE 6 DE 1973

Presidencia de los señores diputados Salvador F. Busacca e Isidro J. Odena

Secretarios: doctor Alberto L. Rocamora y señor Ludovico Lavía

Prosecretarios: Manuel Rodríguez González y Alberto Rodríguez Gallardo

DIPUTADOS PRESENTES:

ACEVEDO, Carlos Luis  
ACUÑA, Hipólito  
AGUIRRE, Mario D.  
AGUIRRE de SÁMBENE, Luisa E.  
ALVAREZ GUERRERO, Osvaldo  
AMADO SALEME, José  
AMAOLÓ, Mario O.  
AMAYA, Mario Abel  
AMERISE, José Carmelo  
ARAGONÉS, Carlos Osvaldo  
ARANA, Tomás Pedro  
ARATA, Juan Carlos  
ARBO, Tomás Ameghino  
ARCE, Rodolfo Juvencio  
ARIANI, Adriano  
ARIGÓS, Ramón Eduardo  
ARAYA, Jorge Francisco  
ARRÚE, Willebrordo  
ASMAR, Ramón  
AUVERO, Carlos Alberto Camilo  
AVILA, Agustín Alfredo  
AZURMENDI, Ernesto  
BAJCZMAN, Raúl I.  
BALESTRA, Ricardo Ramón  
BARBARO, Julio D.  
BEHERAN, Arnoldo Mario  
BELLISIO, Victorio Alberto  
BENEDETTI, Osvaldo Ernesto  
BLANCO, Manuel  
BONAS, Abraham Efraim  
BONIFATTI, Arolinda S. A.  
BRAVO, Carlos Alberto  
BRAVO, Federico S.  
BRITO LIMA, Alberto  
BUSACCA, Salvador F.  
BUSTOS, Tomás Roberto  
CABANA, Manuel I.  
CABEZAS, José Humberto  
CALABRESE, Pablo  
CAMPBELL, Oscar S.  
CAMPOS, Ernesto Manuel  
CAMUS, Jorge M.  
CAPILLO, José  
CARDENAS, Juan Carlos  
CARRAI TOLOSA, Humberto  
CARRERAS, Ruperto R.  
CASAZZA, Luis Angel  
CASTELLANO, Hugo Luis  
CATALANO, José Armando  
CITATI, Angel  
COLELLO, Clemente J.  
COMÍNGUEZ, Juan Carlos  
COSSY ISASI, Edgar  
COSTARELLI, José

CROATTO, Armando Daniel  
CROCCO, Luis Ferdinando  
CHAQUIRÉZ de PALACIOS, María  
D'ANGELO, Lorenzo Francisco  
DAVICO, Miguel Angel  
DAY, Alberto Ricardo  
DE LUCA, Ricardo  
DESPERRASQUES, Rodolfo Eduardo  
DÍAZ ORTIZ, Santiago Francisco  
EGUIREUN, Enrique  
ESPECHE, Juan Bautista  
ESPONDABURU, Raúl Horacio  
ESQUIVEL, Faustino  
ESTIGARRIA, Agustín Tomás  
FALABELLA, Francisco José  
FARIAS, Eduardo Isidro  
FERNÁNDEZ, Dante Dionisio  
FERNÁNDEZ, Juan Máximo  
FERNÁNDEZ BEDOYA, Mariano  
FERNÁNDEZ GILL, Guillermo Carlos  
FERNÁNDEZ VALONI, José Luis  
FERREYRA, Jorge Washington  
FLORES, José María F.  
FONTE, Carlos A.  
FRANCO, Hugo Armando  
FRESCHI, Pedro José  
FUENTES, Pedro Alfredo  
GAITAN, Adelmo Alberto  
GALVAN, Raúl Alfredo  
GALLO, Carlos R.  
GANEM, Héctor  
GARCÍA, Luis Antonio  
GARRE, Nilda Celia  
GASS, Adolfo  
GIMÉNEZ, Nicolás Alberto  
GOLÉ, Tomás Juan B.  
GONZÁLEZ, Ricardo A.  
GRAU, Mario Agustín  
GUALCO, Jorge Nelson  
GUERRERO, Antonio Isaac  
HAIEK, José  
HARRINGTON, Luis José D.  
HUEYO, Horacio  
HUGHES, Gilbert  
IMBAUD, Carlos Alfredo  
INSUA, Carlos Raúl  
ITURRIETA, Aníbal A.  
KELLY, Rodolfo Feliciano  
KUNKEL, Carlos Miguel  
LABAKE, Juan Gabriel  
LASTIRI, Raúl Alberto  
LATRUBESSE, Francisco Alberto  
LAVALLE, Mario  
LAZZARINI, José Luis  
LENCINA, Luis A.

LEPEZ, Lysis Augusto  
LIMA, Hugo Ramón  
LITERAS, María Haydée A de  
LONCHARICH FRANCHI, Cándido A.  
LÓPEZ, Domingo  
LÓPEZ, Horacio Fidel  
LÓPEZ, Miguel Angel  
LÓPEZ de GALLI, Amelia  
LORENCE, Mariano Rufino  
LUCENA, Luis Arnaldo  
LUMELLO, José Erio  
LLORENS, Roberto Oscar  
MACRIS, Antonio J.  
MALDONADO, Clemente  
MARINO, Rafael Francisco  
MARQUEZ, Alfonso Carlos  
MARTÍNEZ, Juan Antonio  
MARTÍNEZ, Pedro Nicolás  
MARTOS, Mario Saúl  
MASTOLORENZO, Vicente  
MAURUM, Fernando Hugo  
MERA FIGUEROA, Julio T.  
MERCHENSKY, Marcos  
MIGLIOZZI, Julio Alberto  
MIRA, Jesús  
MOLINA, Gilberto H.  
MOLINA, Manuel Isaura  
MOLINA ZAVALIA, Armando  
MOLINARI ROMERO, Manuel Ernesto  
MONRELLA, Fausto J.  
MONACO, Horacio Miguel  
MONTERO TELLO, Régulo L.  
MORAL, Angel  
MORENO, Antonio E.  
MORINI, María Teresa Merciadri de  
MOYANO, Francisco J.  
MUNIZ BARRETO, Diego  
MUSACCHIO, Vicente Miguel  
MUSSO, Eufemia  
NARANJO, Decio B.  
NATALE, Ricardo T.  
NICOLICHE, Lisardo Oscar  
NOSIGLIA, Plácido Enrique  
ODENA, Isidro J.  
OSELLA MUÑOZ, Enrique Emilio  
PALACIO DEHEZA, Carlos  
PARENTE, Rodolfo Domingo  
PASCUAL, Paulino Rubén  
PATALAGOTIA, Osvaldo E.  
PAZ, Guido Ulises  
PEDRIN, Ferdinando  
PEREIRA, Antonio  
PETRUCELLI, Agustín  
PONCE, Rodolfo Antonio  
PORTERO, Héctor

PORTO, Jesús E.  
 RABANAL, Rubén Francisco  
 RACCHINI, Juan Nicolás  
 RAFAEL, Juan  
 RAMÍREZ, Juan Manuel  
 RATTI, Luis Carlos  
 RITVO, Miguel  
 RIZO, Eusebio Victor  
 RODRÍGUEZ, Alfredo S.  
 RODRÍGUEZ FLORES, Argentina  
 ROJAS, Ramón Pablo  
 ROLANDO, Esteban Domingo  
 ROMÁN, Irene Graciela  
 ROMERO, Carlos Alberto  
 ROMERO, Juana N.  
 ROSAS, Alberto Horacio  
 ROTA, Silvana María I.  
 RUBEO, Luis  
 RUIZ VILLANUEVA, Arturo  
 SALOMÓN, Jorge  
 SALVADOR, Nicolás  
 SALVATIERRA, Julio Domingo  
 SAMBUEZA, Osvaldo  
 SÁNCHEZ AHUMADA, Luis Alberto  
 SÁNCHEZ TORANZO, Nicasio  
 SANDLER, Héctor Raúl  
 SANGIACOMO, Ricardo Arturo  
 SANGUINETI, Virginia Luisa

SARBOLI, Rubén Juan  
 SARLI, Osvaldo Raúl  
 SERVINI GARCIA, Clara Cristina  
 SILEONI, Nelo I.  
 SILVA, Analicio  
 SLAMOVITS, Ludovico  
 SOBRINO ARANDA, Luis Alberto  
 SOLANA, Jorge D.  
 STECCO, Alberto Eleodoro  
 SUAREZ, Humberto F.  
 SUAREZ, Leopoldo M.  
 SULETA DE ARRAYA, Arminda  
 TACHELLA, Eliberto S. J.  
 TAGLIAFERRO, Jorge  
 TOLLER, Roberto Lino  
 TRABOULSI, Eduardo Elías  
 TRÓCCOLI, Antonio A.  
 TULA DURAN, Joaquín  
 URDÍNEZ de VOLPE, Clotilde Isolina  
 VACCAREZZA, Eduardo H.  
 VALERI, Salvador  
 VAZQUEZ POL, José  
 VIALE, Jorge Omar  
 VIDANA, Roberto  
 VILLADA, Mario Anselmo  
 VILLALBA, Bernardo Samuel  
 VINARDELL MOLINERO, Miguel  
 VITTAR, Rodolfo Oscar

ZAMANILLO, José Miguel  
 ZAPATA, Hipólito Bernardo

#### AUSENTES, CON AVISO:

BARTOMIOLI, Héctor Luis  
 DE APARICI, Ricardo José Manuel  
 FADUL de SOBRINO, Esther Mercedes  
 GUZMÁN de ANDREUSSI, María Cristina  
 MASSOLO, Eduardo A. R.  
 MIGUEL, Pedro Honorio  
 MONSALVE, Evaristo A.  
 VERGARA, Roque Antonio  
 VINTI, Carmelo

#### AUSENTES, CON LICENCIA:

BARRIONUEVO, Roque R.  
 BORRAS, Raúl Antonio  
 FALÚ, Ricardo Munir  
 GARONA, Alberto A.  
 GLELLEL, Jorge  
 LLANO, Juan Pedro  
 MORENO FERRER, José Carlos W.  
 SALIM, Luis  
 SAÚL, Roberto  
 SUELDO, Horacio Jorge  
 SVRSEK, Enrique A.  
 VALENZUELA, Héctor R.

## SUMARIO

- 1.—Consideración del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre impuesto a las ganancias. Se sanciona. (Página 4634.)
- 2.—Consideración del dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales en la cuestión de privilegio planteada por el señor diputado Busacca relacionada con la afectación de los fueros parlamentarios de la señorita diputada Romero en un procedimiento policial, por el que se declara que hubo violación de los privilegios parlamentarios y se impone un arresto de 48 horas al agente de la Policía Federal protagonista del episodio. Se sanciona. (Página 4710.)
- 3.—Consideración del dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales por el que se acuerda permiso al señor diputado Crocco para aceptar el cargo de ministro de Gobierno de la intervención federal en la provincia de Formosa. Se sanciona. (Página 4714.)
- 4.—Apéndice:
  - I.—Sanciones de la Honorable Cámara. (Página 4718.)
  - II.—Inserción. (Página 4734.)

—En Buenos Aires, a los seis días del mes de diciembre de 1973, a la hora 15 y 43:

1

### IMPUESTO A LAS GANANCIAS

Sr. Presidente (Busacca).—Continúa la sesión.

## Dictamen de comisión



Honorable Cámara:

La Comisión de Presupuesto y Hacienda ha considerado el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se propicia implantar un impuesto sobre las ganancias derivadas de fuente argentina, unificando en un solo régimen todos los beneficios obtenidos; y, por las razones que se expresan en el informe escrito y las que dará el miembro informante, aconseja la sanción del siguiente

#### PROYECTO DE LEY

*El Senado y Cámara de Diputados, etc.*

### Impuesto a las ganancias

#### TÍTULO I

#### Disposiciones generales

#### Sujeto y objeto del impuesto

Artículo 1º.—Todas las ganancias derivadas de fuente argentina, obtenidas por personas de existencia visible o ideal, cualquiera sea su nacionalidad, domicilio o residencia, quedan sujetas al gravamen de emergencia que establece esta ley.

Además de las personas indicadas en el párrafo anterior son contribuyentes las sucesiones indivisas, mientras no exista declaratoria de herederos o no se haya declarado válido el testamento que cumpla la misma finalidad.

Art. 2º.—A los efectos de esta ley son ganancias, sin perjuicio de lo dispuesto especialmente en cada categoría y aun cuando no se indiquen en ellas, los rendimientos, rentas o enriquecimientos derivados de la realización a tí-

se refiere este artículo, sobre la base del carácter substitutivo señalado y de los restantes principios indicados al efecto.

Art. 106. — Las disposiciones legales en vigor que, con fines de promoción regional o sectorial, otorgan o autorizan el otorgamiento de la exención o diferimiento del pago del impuesto a los réditos, no comprenden la exención o diferimiento del impuesto de esta ley.

Sin perjuicio de ello el Poder Ejecutivo podrá acordar diferimiento para el pago de este impuesto, por igual cantidad de ejercicios y en las mismas condiciones previstas en las disposiciones aludidas para el impuesto a los réditos.

Art. 107. — Los sujetos al impuesto de esta ley que habían resultado beneficiados por una vigente exención del impuesto a los réditos o un vigente diferimiento del pago de éste, otorgados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente, continuarán en el goce de igual beneficio de exención o diferimiento con respecto al impuesto a las ganancias.

El beneficio resultante de lo dispuesto en este artículo no excederá el período establecido en las leyes promocionales que lo otorgaron o autorizaron su otorgamiento, ni el fijado en su caso por el acto de otorgamiento respectivo, como así tampoco el saldo de ejercicios aún pendientes del goce del beneficio originalmente acordado.

Art. 108. — Pagarán el impuesto de esta ley, con un recargo del treinta por ciento (30 %) todas las ganancias imputables al año fiscal 1974, o sujetas a su pago con carácter definitivo durante dicho año.

Art. 109. — Los contribuyentes que edifiquen unidades de vivienda con destino a vivienda propia, renta o venta podrán deducir de sus ganancias gravadas la parte del total invertido en la construcción de cada una de dichas unidades que establezca el Poder Ejecutivo, el cual queda facultado para determinar la proporción deducible sobre la base del tipo de construcción, valuación fiscal unitaria, condiciones técnicas, ubicación, valor venal o precio de venta de las viviendas, así como en consideración a cualesquiera otras características que contribuyan a definir el interés social de la construcción.

Esta franquicia sólo podrá ser utilizada para los títulos de los planes de construcción aprobados por organismos estatales a los efectos del otorgamiento de apoyos crediticio y siempre que la presentación de dichos planes se efectuare hasta el 31 de diciembre de 1973, inclusive.

El Poder Ejecutivo determinará la forma, oportunidad y condiciones en que se hará efectiva la franquicia.

Art. 110. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

José B. Gelbard.

**Sr. Presidente** (Busacca). — En consideración en general.

Tiene la palabra el señor diputado Díaz Ortiz, miembro informante del dictamen de la mayoría.

**Sr. Díaz Ortiz.** — Señor presidente: en un estudio, titulado *La política impositiva en las economías en desarrollo*, presentado a la Primera Asamblea General de Administradores Tributarios realizada en Panamá en 1967, Carl Shoup dice que tarde o temprano el sistema tributario de un país refleja sus objetivos sociales, sus aspiraciones económicas y su sistema político. A

medida que los objetivos sociales y aspiraciones económicas de un país se extienden y se hacen más específicas, y a medida que cambia la distribución del poder político y económico, varía también la política impositiva y cambia el sistema tributario. Pero con frecuencia entre unos y otros cambios se produce un retraso considerable. La política impositiva queda rezagada con respecto a la política social y económica, y deja de reflejar los cambios cuantitativos y cualitativos en la distribución de la influencia política y económica. Este rezago provoca diferencias entre los objetivos fundamentales del país y el sistema tributario, lo cual origina diversos tipos de tensiones: se aumenta la evasión, la administración se hace menos eficiente y se depende más de la inflación que de la imposición. Esta situación —al decir del tratadista mencionado— puede continuar por décadas.

Obsérvese, señor presidente, con cuánta claridad y en qué forma sencilla se expone la importancia del sistema tributario como factor fundamental de cualquier política económica y social.

En la medida en que esto no se tenga muy en claro, cualquier política de redistribución de los ingresos fracasará. Por ese motivo y para que no exista un retraso entre los objetivos fijados por el gobierno del pueblo y los instrumentos adecuados para concretarlos, nos toca hoy analizar la reforma impositiva estructural para lograr la evolución económica y social que nos hemos propuesto.

El principio que sostiene nuestro movimiento en este aspecto de la tributación de que quien más riqueza tiene más debe tributar se traduce también en el mensaje que remitiera el Poder Ejecutivo juntamente con el proyecto de ley, cuando dice que sólo en los casos de altos beneficios la medida proyectada supondrá un incremento de la presión tributaria, mientras redundará en una sensible reducción en los niveles de menores rentas.

En relación con este tema de la política tributaria, me voy a permitir leer unos párrafos de un distinguido y joven tratadista argentino, doctor Tulio Rosenbuj, quien en su libro *La imposición como política* refiere que «el elemento distintivo de los ingresos tributarios, en tanto ingresos públicos, radica en la posibilidad por parte del ente político de elegir sus fuentes. Y ello se verifica mediante la valoración, que es siempre política de las diferentes manifestaciones de capacidad contributiva. El contenido del criterio de la capacidad contributiva es esencialmente contingente y correlato obligado de la interpretación que asume la autoridad política sobre sus alcances. El gobierno evalúa de acuerdo con la concepción de las fuerzas sociales y económicas a las cuales responde qué manifestaciones de capacidad contributiva coadyuvan a su propósito para no gravarlas o gravarlas en menor escala, y cuáles otras no hacen, para gravarlas en mayor grado o intensidad.

»La valoración de la capacidad contributiva está permeada por las necesidades de los sectores sociales con poder político.

»Esto implica distinguir, entre otros, los ingresos tributarios interesantes y aquellos no interesantes para el poder político. En efecto, no todos los ingresos tributarios se cualifican en modo análogo. Al menos para el gobierno. La calificación surgirá a partir de un orden de preferencias dictado por su interés y el de los sectores sociales que le respaldan, tendiente a preservar de la imposición determinadas manifestaciones de capacidad contributiva, distribuyendo la carga tributaria en un todo coherente con ese interés.

»Los ingresos tributarios interesantes suponen concebir la política del impuesto de modo que no afecte situaciones sociales consolidadas, coincidentes con la estabilidad del sistema de producción y (eventualmente) con los propósitos del gobierno de turno. Son interesantes aquellos ingresos que no alteran, en substancia, posiciones económicas de los sujetos a los cuales, en un sistema de producción determinado, se les atribuye cualidad de promotores de su existencia y vigencia; verbigracia, en el Estado liberal de base capitalista: gran empresa, gran propiedad agraria, titulares de altos ingresos o fortunas, etcétera.

»Los ingresos tributarios no interesantes, en cambio, implican una concepción que es reverso de la anterior, y en virtud de la cual la distribución de la carga tributaria afecta cualitativa y cuantitativamente a los grupos sociales discrepantes o no solidarios con la visión política expuesta por el gobierno. Son no interesantes aquellos ingresos que no alteran, en substancia, las posiciones económicas de sujetos a los cuales, en un sistema de producción determinado, no se les atribuye otra cualidad que la de ser útiles a los promotores de su existencia y vigencia; verbigracia, en el Estado liberal capitalista: la clase trabajadora, pequeña empresa, pequeño productor, titulares de bajos o medianos ingresos o fortunas.

»La consecuencia que se desprende de lo anterior radica en constatar que la imposición no es un instrumento ingenuo en una sociedad desigual, sino que percibe y recibe las disparidades de hecho, y a ellas se amolda.

»El fenómeno tributario, en consecuencia, es producto de las tensiones políticas existentes en el seno del sistema social y sirve a la preponderancia de algunos sectores que afirman coactivamente la vigencia de su poder. Quienes detentan el poder político, afirma Lolini, tienden a servirse en su propio beneficio o de sus amigos, patrones o clientes, del movimiento de la riqueza financiera, apelando para ello a una coacción sustancial.

»La premisa de una interpretación política de la imposición es la afirmación que en una

sociedad desigual —donde para decirlo con palabras de Stuart Mill “no existió igualdad en el punto de partida”— las decisiones del poder político portan consigo una impronta de desigualdad originaria.»

Y como no podía ser de otra manera, la reforma impositiva implica un cambio posible con relación al régimen impositivo vigente, y su análisis debe ser realizado desde dos puntos de vista diferentes, pero concurrentes. El primero de ellos, dentro del marco global de la economía y como parte del conjunto de medidas económicas propiciadas por el Poder Ejecutivo nacional que tienden a responder a una filosofía general compartida por más del ochenta por ciento de la población argentina. Esa filosofía propende a lograr un mayor bienestar general de la población, el acceso a niveles de vida compatibles con la naturaleza del ser humano, el derecho al acceso a la educación y a toda forma de desarrollo cultural, y todo ello como parte de un amplio proceso que implica el desarrollo de las propias fuentes culturales y económicas, con independencia de los factores externos o internacionales, que se rigen por pautas diferentes, en un ámbito —tal como la generalidad lo reclama— de decisión plural y compartida; es decir, en definitiva, un proceso popular, democrático y nacional.

En segundo lugar, señor presidente, la reforma impositiva debe ser analizada desde un punto de vista técnico, como conjunto de medios idóneos y adecuados que tiendan a concretar la filosofía política del pueblo, dentro del marco de la ciencia económica y financiera.

Cabe ahora enfrascarnos en el análisis de la filosofía que motiva este proyecto de ley de impuesto a las ganancias. En primer lugar, recordemos algunos principios fundamentales relativos a la existencia del tributo de acuerdo a los principios modernos de política tributaria, en función del medio económico y social. Estos principios son básicamente los siguientes: aceptación por parte de la población; utilidad como instrumento de recaudación; carácter adecuado para concurrir, junto con el gasto, a la política de redistribución de los ingresos que orienta la política filosófica del gobierno; fácil administración, y que, razonablemente, constituya un instrumento de promoción económica. En primer lugar, el impuesto debe contar con la aquiescencia de la población. Ningún tributo, si no está adecuado al estilo de vida y a la formación socioeconómica del pueblo, puede tener éxito. A ciertos niveles de cultura social y política crecen los requerimientos de equidad en la distribución de las cargas y en el tipo de impuesto a través del cual ello se logra.

Este nivel de cultura hace fundamentalmente al grado de acatamiento de la tributación y de conciencia tributaria que se haya formado. A su vez, este grado de acatamiento tiene una

íntima vinculación con la imagen y sensación que el pueblo tiene de sus gobernantes y del uso que hacen del dinero que se recauda.

La historia de nuestro país es, en ese sentido, sumamente demostrativa de la realidad de esta afirmación. Mientras existió el consenso de que los diferentes gobiernos no realizaban políticas adecuadas para el desarrollo del país y no se preocupaban por invertir en obras de infraestructura que reportaran beneficios a la comunidad; cuando no existía consenso de que el dinero contribuía a redistribuir el ingreso de la comunidad hacia los sectores de menores recursos; mientras no existía una política nacional de seguridad que protegiera a las clases pasivas; en tanto el gobierno no mostrara con realidad concreta que invertía para el mejor funcionamiento de las escuelas y de los hospitales; mientras todo eso no se daba, existía una sensación de que el contribuyente tiraba su dinero en la medida en que pagaba sus impuestos.

Este proceso, señor presidente, ha sido revertido. Hoy en la Argentina existe un gobierno del pueblo y para el pueblo. Un gobierno que ya ha enunciado que sus inversiones sociales son de magnitud, que ha definido la realización de importantes obras públicas de infraestructura; un gobierno que ha señalado objetivos muy concretos en materia de vivienda social; en suma, un gobierno que hace obras, un gobierno que no tira el dinero del pueblo sino que lo revierte en el proceso en aquellas áreas que el mismo pueblo reclama.

Una de las causas fundamentales de la evasión, o sea, la ausencia de un asentimiento a la acción del gobierno, está en vías de desaparecer.

Claro que también existen otras causas de la evasión impositiva tales como los canales legales que un ordenamiento puesto al servicio de intereses no nacionales había creado y que también en este caso estamos decididos, con este proyecto y otros que integran la reforma impositiva, a modificar substancialmente.

El impuesto, dijimos antes, debe ser útil como instrumento de recaudación, es decir debe ser exitoso en cuanto a su rendimiento, y compatible este rendimiento con un costo adecuado y una fácil administración. En este aspecto, no caben dudas de que el hasta ahora llamado impuesto a los réditos, si bien adolecía de una serie de deficiencias, que con este proyecto se tratan de subsanar, reúne toda esa serie de características que lo hacen apto en el proceso de redistribución de la riqueza, es razonablemente administrable y tiene un adecuado rendimiento.

En ese aspecto es útil recordar algunas cifras. En 1941, representaba un 13,72 por ciento de la recaudación total; en 1942 sube al 18,92 por ciento; y a partir de 1943 sube al 22,86 por ciento, manteniéndose entre 1952 y 1959 en límites cercanos al 30 por ciento de la recaudación total. A partir de 1960 se produce sintomáticamente una brusca caída en la recaudación de este impuesto.

El aspecto redistributivo del impuesto es otro aspecto a que hacen referencia las modernas doctrinas. En ese sentido existe un consenso unánime respecto a que es deseable y recomendable tal función. Por supuesto, esta finalidad debe estar estrechamente coordinada con la política del gasto público, la que a su vez se vincula íntimamente con el aspecto que mencionamos de cómo el Estado utiliza los recursos que recauda.

Los impuestos como el que nos ocupa, que a través de la aplicación de alícuotas progresivas extraen proporcionalmente más renta de los sectores de más altos recursos, tienen una más amplia aceptación desde este punto de vista, ya que acentúan la redistribución en favor de los sectores de más bajos ingresos. De esa manera se logra elevar los niveles de vida de la comunidad, ya que son estos sectores de más bajos ingresos quienes utilizan en mayor proporción los servicios generales e indivisibles que presta el Estado y los que se ven favorecidos por la orientación del gasto público en planes de vivienda, salud, educación, asistencia social, turismo, etcétera.

Cabe ahora analizar los aspectos fundamentales del proyecto en consideración, para lo cual me voy a permitir leer las referencias que a este respecto hiciera uno de los asesores integrantes del equipo del Poder Ejecutivo que nos acompañaron en las reuniones de comisión, el señor Rodríguez Silva, quien dice: «pienso que previamente debe hacerse notar que ésta no es una ley que nace de la nada, sino que es una simple reestructuración del impuesto a los réditos, en el que se han introducido las modificaciones necesarias para cumplir con los objetivos prefijados. El resto de las disposiciones de esa ley, que son muchas, se volcaron a la nueva ley de impuesto a las ganancias como estaban, sin modificaciones, salvo raras excepciones». Es decir que queda claro que, en realidad, sobre la base de la ley de impuesto a los réditos se han readecuado algunas de sus disposiciones para crear las condiciones de la modificación y del cambio que se propone.

Básicamente, estos cambios son susceptibles de ser agrupados en forma racional. Una de las modificaciones es la integración de todo tipo de beneficios que corresponden a los impuestos a los réditos y a las ganancias eventuales.

Generalmente se entiende por ganancia de capital el mayor valor logrado por toda clase de bienes a cuya negociación el contribuyente no se dedica regularmente, y por renta la que se obtiene de aquellos bienes a cuya negociación el contribuyente se dedica regularmente, así como las remuneraciones que obtienen las personas por sus servicios o por el uso o disposición de sus bienes. Normalmente se engloban en los conceptos precedentes los respectivos quebrantos ocasionados por operaciones del mismo carácter, y usualmente, por su naturaleza, la

mayoría de las rentas ordinarias son más o menos periódicas y regulares, en tanto que las ganancias de capital generalmente son fluctuantes en cuanto a su monto y a su frecuencia.

Pareciera casi indiscutible que tanto las ganancias de capital como las rentas habituales u ordinarias son manifestaciones concretas de una misma capacidad contributiva de sus beneficiarios, y por ende es equitativo sujetarlas a un impuesto único. Esta integración de ambas manifestaciones de capacidad contributiva en un único impuesto es lo que ha dado lugar en doctrina a una serie de teorías respecto de las posibilidades reales de su integración o no en mérito a consideraciones de equidad y de administración del tributo.

No obstante ello, podríamos afirmar que ya existe un consenso casi unánime en cuanto a que por razones de equidad dichos ingresos deben ser gravados en un solo impuesto que los integre, aunque se difiere doctrinariamente en cuanto al método más adecuado para ello. Si admitimos el argumento de que las ganancias de capital indican claramente una posibilidad económica de consumo o de inversión, es decir, manifestación de capacidad contributiva, y que el rasgo distintivo de que sean fluctuantes no las diferencia substancialmente de las otras —recuérdese que los ingresos típicamente fluctuantes de empresas de construcción, artistas, autores, forestación, son sin ninguna discusión sujetos al impuesto a los réditos—, tenemos configurado el argumento fundamental en favor de que tales ganancias se incluyan junto con las rentas ordinarias bajo un impuesto único que grave los ingresos netos, medidos éstos como la suma del incremento patrimonial entre dos momentos determinados y en consumo realizado.

Se argumenta en contra de lo expuesto que dado que las ganancias de capital son de tipo ocasional, a veces inesperadas, confieren una capacidad contributiva menor que la que otorga una fuente de réditos periódica y permanente, y que por lo tanto, si se las grava, debiera hacerse bajo un tratamiento preferencial en comparación con el que se aplica a las rentas ordinarias. Pero se olvida fácilmente que este mismo argumento da el fundamento para la solución contraria, ya que tratándose de ingresos que el contribuyente no cuenta para su desenvolvimiento o gastos normales, pueden soportar un impuesto mucho más severo que aquél que recae sobre los réditos comunes.

La doctrina ha evolucionado en el sentido de que la capacidad contributiva se debe determinar en función del incremento del patrimonio y el monto de los consumos, denominándose a esta concepción «teoría del balance». En cambio, las legislaciones de los diferentes países de antaño han tomado en consideración la noción del rédito como el flujo anual ordinario, caracterizado a su vez como teoría de la fuente. Pero razones de diverso orden han hecho que, paulatinamente y a través de vías de excepción, se le fueran incor-

porando elementos de la teoría del balance. Esto ha sucedido en nuestro país, como bien lo manifiesta el mensaje del Poder Ejecutivo. En cambio, en la legislación de los Estados Unidos de América se define tan ampliamente el concepto de rédito o ingreso que incluye la ganancia de capital aunque a ésta la grava con una tasa preferencial.

Es importante recalcar que el hecho de que se asigne un tratamiento impositivo diferente a las ganancias normales y repetitivas, de las que son ganancias de capital, fomenta una tendencia por parte del contribuyente a la creación de ganancias de capital, incluso disfrazando la naturaleza jurídica de las operaciones. A esto responde la administración fiscal con la incorporación de normas tendientes a restringirlas. Con ello, en definitiva, se logra agregar cada vez mayor complejidad a los sistemas tributarios.

La integración de sistemas disímiles entre sí se conjuga y tiende a hacer desaparecer la complejidad de un sistema que justamente en este proyecto se trata de eliminar drásticamente, con el objetivo de lograr una mejor administración del impuesto y una mayor facilidad de cumplimiento y control.

Creo que no cabe insistir en que la integración a que conduce la norma proyectada habrá de permitir, sin duda, una mayor equidad en la distribución de la carga pública. Numerosos autores argentinos así se han expedido, como también las diferentes jornadas organizadas por congresos de profesionales en ciencias económicas. Esto podría parecer interesado, pero creo importante recordar que autores norteamericanos también se han expedido en el mismo sentido, con expresiones doctrinarias así como propuestas concretas para diversos países en los que integraron misiones técnicas para reformas tributarias.

Se cita así a Clark, autor norteamericano, que afirma que el Congreso norteamericano nunca ha dejado de sostener que las ganancias de capital constituyen ingresos gravables, ni parece haber aceptado acordarles el tratamiento preferencial de que gozan en virtud del pretendido carácter de ilusorias o irreales que algunos les adjudican. Para este autor, el hecho de que se les acuerde un tratamiento preferencial es el resultado de una transacción entre grupos de presión y consecuencia de las muy altas tasas que se pretende imponer a los réditos en la legislación fiscal federal norteamericana, a las que el contribuyente procura oponer cuanta medida resulte de una reducción de la base imponible.

Algunos autores sostienen que, como resultado de los artificios de que se vale el contribuyente norteamericano para transformar rentas ordinarias en ganancias de capital y de la acción del gobierno para contrarrestarla, que se manifiesta en la incorporación de nuevas y complejas normas, parecieran justificadas las opiniones de Surrey y de Clark de que las normas que re-



gulan el tratamiento de las ganancias de capital representan la mayor fuente de complejidad en el código norteamericano de la renta.

Y esta situación no es desconocida por nosotros. En efecto, tal como lo afirma el mensaje del Poder Ejecutivo, la experiencia recogida durante el tiempo de vigencia —coexistencia— de ambos tributos, ha puesto en evidencia la injusticia tributaria que conlleva la discriminación en cuanto obligación fiscal de distinta magnitud frente a iguales montos de beneficios, según sea el origen o composición de los mismos, o, en numerosos casos, según sea la forma adoptada para realizar las operaciones. Agravado esto por las innumerables controversias originadas en la caracterización de los beneficios a los efectos de su encuadre en uno u otro gravamen. La solución adoptada por la ley en sus artículos 79 y siguientes es la que, a nuestro juicio, respeta con mayor énfasis la equidad en el tributo. En efecto, no se hace discriminación alguna en cuanto al tipo de tasa a que es gravable esta ganancia, más aún, forma parte de la totalidad de las rentas del ejercicio y por ende, sujeta a la progresividad sobre la totalidad de las ganancias. Pero en aquellos casos en que razones de orden social lo justifican plenamente, situaciones perfectamente definidas en la ley, se atenúa la ganancia a considerar, eliminándosela incluso para otras situaciones.

Me referiré ahora a otro de los aspectos de substancial modificación que contiene el proyecto en tratamiento: la eliminación de las desgravaciones impositivas del cuerpo de la ley.

A nadie escapa que el impuesto constituye una herramienta significativa de promoción de la actividad económica. En términos técnicos, se habla del uso extrafiscal del impuesto, medio que utiliza el Estado para promover determinada actividad o zona geográfica o para motivar al contribuyente a realizar inversiones adicionales, etcétera.

Como herramienta, es incuestionable que su uso debe ser ponderado razonablemente y en función de objetivos y circunstancias perfectamente delimitadas. Pero, en nuestro país, la multitud de exenciones, exclusiones y deducciones que se incorporaron a la ley del impuesto a los réditos, mediante numerosísimas modificaciones, llevaron al borde del absurdo de que, prácticamente, la excepción se convirtiera en norma. Esto indica un uso indiscriminado de esta herramienta, al que no es ajeno el múltiple juego de intereses sectoriales o influencias que se juegan tras los funcionarios para obtener una exención, una interpretación u otro tipo de normas complementarias. En fin, se trata de una serie de medidas que, tomadas en forma individual, pueden convertirse en elementos eficaces para motivar o promover aquello que el Estado entiende como significativo y

que, en forma global, constituye una de las vías legales más importantes para la evasión del pago del tributo.

Numerosos trabajos de especialistas en la materia coinciden con el criterio que sustentamos, considerando esta modalidad como un aspecto negativo del actual impuesto a los réditos. Así, Rebizo y Shindel afirman que la proliferación de exenciones, liberalidades y medidas de promoción, que no responden a una política coherente en la materia, también ha contribuido a desdibujar la base del impuesto, liberando del gravamen grandes porciones del ingreso, sin que pueda considerarse si realmente las medidas han sido lo suficientemente eficaces, computando no sólo el estímulo buscado en el sector privado sino también la merma de la recaudación del sector oficial, que ha debido ser suplida por otros medios, como ser la emisión de moneda.

Otro especialista, Hilario Sánchez, dice, con mayor crudeza, que se deben eliminar substancialmente las deducciones especiales y las exenciones, para llegar a generalizar el tributo con el alcance conceptual que lo caracteriza. Debe marginarse la presión de grupos de intereses sectoriales, que habitualmente solicitan desgravaciones sin el menor sustento doctrinario.

En las Primeras Jornadas Tributarias de Graduados en Ciencias Económicas de la Capital Federal, realizadas en Mar del Plata en 1971, se consideró que uno de los factores que contribuyeron a desdibujar la base del gravamen resintiéndolo su generalidad ha sido la profusión de deducciones, desgravaciones, franquicias y exenciones con fines extrafiscales, recomendando que «en materia de incentivos y desgravaciones, se estima esencial que estén coordinadas con los objetivos de un programa económico de mediano plazo que garantice su uso selectivo con respecto a actividades y/o zonas prioritarias, con una permanencia que asegure plenamente los efectos buscados y previa evaluación de su costo social, en especial el menor ingreso fiscal debidamente cuantificado».

Es decir, señor presidente, que existe una coincidencia general respecto a la necesidad de que por las vías de franquicias indiscriminadamente otorgadas no se modifique la imposición y se distorsione el objetivo de gravar las rentas a tasas progresivas.

Pero, además, cabe citar otro argumento fundamental. De esta manera, tal como sancionaremos el proyecto, el Congreso de la Nación retomará su potestad indelegable de conceder las franquicias, ya que lo hará con plena conciencia de hacerlo en coincidencia con los objetivos nacionales que se ha trazado el gobierno del pueblo, del que forma parte.

Otra de las modificaciones substanciales es el sensible aumento de mínimos no imposables y deducciones personales. El proyecto que estamos considerando significa un importante avance en cuanto se refiere a la actualización de las de-

ducciones que los contribuyentes pueden realizar en concepto de mínimo no imponible, deducciones adicionales por trabajo personal, deducciones por cargas de familia y por gastos médicos.

En efecto, partiendo de un concepto filosófico fundamental, de que el hombre debe tener el uso y goce total de aquella parte de su ingreso que le permita vivir adecuadamente dentro de las pautas dadas por la situación económica general, sosteniendo su familia, y le permita un más fácil acceso a la educación en todos sus niveles y a las distintas manifestaciones de la cultura, se reconoce la intangibilidad de tales ganancias.

El gobierno entiende que aquellos que desarrollan una actividad personal, sea como comerciantes, industriales, profesionales, trabajadores en relación de dependencia o prestación de servicios en forma independiente, es decir, en la medida en que haya efectivamente una actividad personal volcada a una tarea productiva, dichos trabajadores deben tener la posibilidad concreta no solamente de tener desgravado el mínimo necesario para el sostén de su familia, sino también deben tener la posibilidad muy concreta de capitalizarse paulatinamente.

Con las restricciones fundamentales derivadas de la necesidad de incrementar substancialmente el gasto público para lograr una mayor redistribución de la riqueza, de manera de elevar substancialmente el nivel de vida de los sectores de la población que obtienen recursos en el límite mínimo necesario para vivir, como por ejemplo la clase pasiva, se ha establecido una serie de modificaciones no sólo en los montos sino en el aspecto conceptual de este tipo de deducciones. En efecto, se ha establecido un mínimo no imponible único para todos los contribuyentes, cualquiera sea el origen de sus ganancias. Este mínimo alcanza a la suma de 20.400 pesos anuales, lo que representa un promedio mensual de 1.700 pesos, estimado como el mínimo adecuado para una subsistencia razonable. En la estructura vigente, aquellos que realicen trabajo personal tienen una deducción adicional que es diferente si se presta servicios como dependiente o en forma de actividad independiente. En aquellos casos de comerciales o industriales que obtienen rentas de tercera categoría, se admitía hasta el presente una deducción adicional muy pequeña en la medida que efectivamente trabajaran personalmente en su actividad.

En el proyecto que estamos considerando se ha procedido a unificar la deducción adicional para todos aquellos que obtienen rentas de la cuarta categoría, independientemente de la forma en que la realicen. De esa manera se ha mejorado la equidad del impuesto, dado que no existe razón valedera alguna para establecer esta irritante diferencia.

Comparando dos profesionales que percibían un ingreso mensual similar, pagaba mucho mayor impuesto aquel que lo obtenía trabajando

en forma independiente que el otro que lo hacía como empleado en relación de dependencia en una empresa o como agente de la administración pública. De ahora en más, todos los contribuyentes que obtengan rentas de la cuarta categoría, es decir aquella establecida en el artículo 78 del proyecto, provenientes del desempeño de cargos públicos, del trabajo personal en relación de dependencia, de las jubilaciones, pensiones, retiros o subsidios de cualquier especie en cuanto tengan su origen en el trabajo personal; del ejercicio de profesiones liberales y de funciones de albacea, síndico, mandatario, gestor de negocios, director de sociedades anónimas, y fideicomisario; los derivados de la actividad de corredor, viajante de comercio y despachante de aduana; y los servicios personales prestados por los socios de las sociedades cooperativas de trabajo, que trabajen personalmente en la explotación, incluida la renta percibida por retorno, tendrán derecho a deducir la suma de 24.600 pesos anuales, como deducción especial, lo que representa una reducción adicional mensual de 2.500 pesos.

Obsérvese, señor presidente, que de esta manera un contribuyente que percibe rentas de la cuarta categoría, en caso que no tenga cargas de familia, no pagará un solo peso de impuesto, si no supera el ingreso mensual neto de 4.200 pesos.

Para los contribuyentes que obtengan rentas de la tercera categoría, es decir, preponderantemente actividades comerciales e industriales, en la medida en que trabaje efectivamente en su negocio, tendrá derecho a deducir anualmente, en forma adicional a su mínimo no imponible, la suma de 18.000 pesos, lo que representa una deducción mensual adicional de 1.500 pesos. Esta deducción, señor presidente, tiene el sentido de equiparar al pequeño comerciante o pequeño industrial que realiza trabajo personal a los contribuyentes de la cuarta categoría. La diferencia con éstos reside también en un concepto de justicia tributaria, por cuanto es indudable que puede computar como deducciones de sus rentas una serie de gastos que normalmente el que las obtiene exclusivamente de su trabajo personal, sin aplicación de capital, no puede hacerlo.

En otro orden de cosas, se ha mejorado sensiblemente la deducción por las cargas de familia. En efecto, se contempla para el año 1974 una deducción de 6.000 pesos por esposa y por año y, además, las cargas adicionales de hijos y parientes que contempla el artículo 23 se establecen en 4.000 pesos para cada una de ellas, sin discriminar respecto del tipo de relación que fuere, con lo cual se reconoce expresamente que el contribuyente deducirá una suma exactamente igual para sus hijos, padres u otras personas a su cargo.

Se establece así mismo la deducción de 600 pesos anuales por gastos médicos para el contribuyente y cada una de las personas a su cargo,



sin ningún tipo de documentación; es decir, como presunción de haber efectuado realmente el gasto y sin necesidad de demostrarlo.

Uno de los aspectos que han sido siempre señalados como negativos en la carga del impuesto a los réditos ha sido la constante desactualización de este tipo de deducciones año a año. La renuencia de la administración y del Parlamento, en su caso, a actualizar dichos montos en función del aumento en el costo del nivel de vida, por razones puramente fiscales, hizo que durante muchos ejercicios las deducciones que el contribuyente podía realizar fueran insignificantes en relación con el gasto real de subsistencia. Esto contribuyó notablemente a que el responsable recurriera a cualquier medio para no abonar el impuesto sobre aquella parte de su ingreso que le era necesaria para sostener a su familia. Nosotros, compenetrados de esta situación, y con la finalidad de eliminar aquellas disposiciones que tornaran inequitativa la aplicación de la carga tributaria, hemos optado por un procedimiento de actualización permanente de estos valores. A través de las disposiciones del artículo 23 del proyecto se establece la obligatoriedad de su actualización en el mes de enero de todos los años mediante la aplicación del índice de actualización que fije la Dirección General Impositiva sobre la base de los datos que deberá suministrar el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Este índice a aplicar deberá tener en cuenta la variación producida en los índices de precios al consumidor en el período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre del año fiscal inmediato anterior a aquel para el cual los respectivos importes se actualizan. De esa manera habremos puesto definitivamente fin a un aspecto negativo en la ley vigente.

Pero esto no es todo, señor presidente. Nuestro gobierno, imbuido de una filosofía humanista que tiene como concepción fundamental la felicidad del hombre, ha agregado una nueva deducción. Todos aquellos contribuyentes que no tengan su vivienda propia tendrán derecho a deducir la suma de quince mil pesos anuales durante el lapso de cinco años con la finalidad de iniciar la adquisición de su propia vivienda. El contribuyente podrá no abonar impuesto sobre esta suma como un estímulo adicional para adquirir su vivienda o construirla. Las disposiciones del artículo 110 son muy amplias al respecto, de manera que el contribuyente podrá, al cabo de cinco años, demostrar la iniciación de la construcción de la compra o su inclusión en los planes oficiales de ahorro y préstamo para la vivienda de la manera más simple y amplia. En el sexto año, es decir, luego de haber deducido durante cinco años la suma de 15.000 pesos anuales, lo que representa 75.000 pesos en todo ese período, deberá demostrar que la opción que ha tomado la ha concretado mediante cualquiera de las formas que dicho artículo admite. Correlativamente, para aquellos que hubieran abu-

sado de este beneficio de nuestro gobierno se establece como sanción el reintegro a su balance impositivo de dicha suma y en un solo período, con lo que deberán tributar a tasas mucho más altas.

Entendemos, señor presidente, que el impuesto no recaerá, de este modo, sobre aquella parte del ingreso que por derecho natural se debe generar en cualquier medio en que la dignidad humana constituye el objetivo final de cualquier concepción política o económica. Elementales razones de justicia avalan esta consideración especial. Entendemos que por primera vez, en forma coherente, razonable y justa, se plantea de manera concreta y rigurosa que todos aquellos que viven de su trabajo personal, en cualquiera de las manifestaciones de la vida moderna, tienen derecho a disponer libremente de aquella parte de sus ingresos que sea necesaria para vivir libremente con sus familias, haciendo realidad aquello de que el hombre es el destinatario final de nuestra filosofía política. El impuesto de aquí en más recaerá sobre lo que excede de ese monto, con lo cual estamos iniciando la gran reforma a que nos hemos comprometido ante el pueblo argentino.

Otro de los temas de la substancial reforma que contiene este proyecto es el que se refiere a la disminución de las tasas del impuesto y a la acentuación de la progresividad en los ingresos más altos. Fieles a la concepción que hemos expresado, entendemos, señor presidente, que para que el impuesto sea justo debe recaer progresivamente en mayor escala sobre las rentas mayores. De otra manera, no cabría la posibilidad de plantear una política de redistribución de la riqueza y de apoyo a los sectores de menores recursos. Esta concepción tiene validez universal a nivel político y a nivel técnico.

Por ello, las escalas del impuesto incluidas en el artículo 97 del proyecto se diferencian substancialmente de las escalas vigentes. Se ha disminuido la incidencia impositiva en aquellas rentas o ingresos de las escalas inferiores de la tabla, aumentándoselo consiguientemente a los ingresos superiores.

La ganancia neta imponible del contribuyente, es decir la obtenida de su actividad, deducidos los gastos que la misma ley establece y los mínimos no imponibles, cargas de familia, gastos de atención médica y deducción especial para compra de vivienda propia, tendrán en el primer escalón, y siempre que no supere los cinco mil pesos, un impuesto del siete por ciento.

Ello significa, señor presidente, que, por ejemplo, el contribuyente que obtenga rentas de cuarta categoría, con familia tipo, es decir, esposa y dos hijos, y que haga uso de la opción para compra de vivienda, tendrá un monto total no imponible de 76.400 pesos anuales, por los cuales no abonará un solo peso de impuesto. De obtener ingresos por encima de esa cifra, por ejemplo, 80.000 pesos anuales, es decir apro-

ximadamente un sueldo neto de deducciones y retenciones de 6.150 pesos mensuales, tributará un impuesto del 7 por ciento sobre el excedente de 76.400 pesos, es decir sobre 3.600 pesos, lo que representa un impuesto de 252 pesos, que aproximadamente representa un impuesto mensual de 21 pesos.

Así, señor presidente, paulatinamente la escala se va incrementando. En un contribuyente que obtiene rentas netas de toda deducción, es decir renta neta sujeta a impuesto de 70.000 pesos, el impuesto a abonar será de 10.550 pesos, lo que representa una tasa real sobre ese monto de 15 por ciento. En el caso de un contribuyente cuya renta neta sujeta a impuesto sea del orden de los 100.000 pesos anuales, la tasa asciende al 18,95 por ciento; en el tramo de los 130.000 pesos anuales de renta neta imponible, la tasa asciende al 23 por ciento; cuando la renta neta sujeta a impuesto alcance los 170.000 pesos, la tasa del impuesto trepa al 27 por ciento; por encima de esa suma la renta adicional sobre el excedente tributará el 45 por ciento.

De esta manera se acentúa la progresividad del impuesto en las escalas superiores, con lo cual los contribuyentes de mayores recursos económicos participarán en mayor medida en la tributación, cumpliendo la exigencia de que la contribución es proporcionalmente mayor cuanto mayor capacidad contributiva se tenga.

Otro de los aspectos sometidos a una reforma esencial, en el proyecto sobre el cual estoy informando, es el que se refiere a la real situación de la sociedad conyugal, a los efectos impositivos.

El proyecto plantea un cambio importante en un aspecto que ha sido controvertido desde el punto de vista económico.

En efecto, el artículo 29 de la actual ley del impuesto a los réditos expresa que no son admisibles a los efectos del impuesto las sociedades entre cónyuges.

Agrega que cuando un cónyuge aporta bienes propios u otros que le pertenecen a una explotación, comercio o industria que realiza el otro, se presume de derecho que el rédito que corresponde al cónyuge que aportó tales bienes equivale al interés que fija para los descuentos comerciales la entidad oficial encargada de ello, y, tratándose de inmuebles, se considerará como rédito el valor locativo que corresponda a los mismos. Así mismo, se establece que cuando la modalidad de la explotación lo requiera, o atento a las características del bien aportado, se justificara un tratamiento distinto al explicado, la Dirección General Impositiva determinará la retribución que corresponda, adoptando un procedimiento racional y equitativo. Ello significa que si el cónyuge que no está al frente de la explotación aporta también trabajo, es decir que se trata de una verdadera sociedad, dado que se unen capitales y esfuerzos en comunidad para producir réditos de la tercera categoría, la Di-

rección General Impositiva debe fijar la retribución que corresponde al cónyuge por el trabajo que efectúa, lo que equivale a decir que además de la retribución por el capital se fijará una retribución por el trabajo.

Por supuesto que esto no significa de manera alguna el reconocimiento de una sociedad real y de una distribución del beneficio entre ambos cónyuges. Esta situación, evidentemente, no es justa, dado que son muchas las sociedades reales constituidas por los cónyuges donde ambos aportan capitales propios independientemente de los gananciales, y además realizan trabajo personal efectivo.

La nueva norma incluida en el artículo 32 admite la sociedad entre cónyuges como reconocimiento expreso a una realidad económica y social. Pero no admite la posibilidad de formas fraudulentas que, mediante simulación, justifiquen distribuciones de ganancias entre cónyuges para atenuar la progresividad del impuesto, ya que se establece la limitación de que sólo serán admisibles cuando el capital esté integrado por aportes de bienes cuya titularidad les corresponda de acuerdo con las disposiciones de los artículos 29 y 30 del proyecto. A su vez, el artículo 29 expresa que corresponderá atribuir a cada cónyuge las ganancias provenientes de: a) Actividades personales (profesión, oficio, empleo, comercio, industria); b) Bienes propios; c) Bienes adquiridos con el producto del ejercicio de su profesión, oficio, empleo, comercio o industria. En este último inciso se eliminó, respecto de la legislación vigente, la limitación que establecía que tratándose de la mujer debía hacerse constar en la escritura de adquisición que el dinero provenía de alguno de esos conceptos, y no se impugnara de simulado el acto.

La eliminación de esta restricción responde a una situación de simplicidad de las normas. Muchas veces, las compras las realizaba efectivamente la esposa, pero dado que no se tenía pleno conocimiento de esta obligación no se inscribía adecuadamente esta aclaración, poniendo en distinto pie de igualdad a los contribuyentes. De ahora en más, los bienes propios de la mujer inscritos a su nombre le pertenecerán y se admitirá impositivamente así, sin establecer presunciones de simulación, por otra parte difíciles de probar.

A su vez, el artículo 30 establece que «corresponde atribuir totalmente al marido los beneficios de bienes gananciales, excepto: a) Que se trate de un bien ganancial adquirido por la mujer en las condiciones señaladas en el apartado c) del artículo anterior; b) Que exista separación judicial de bienes; c) Que la administración de los bienes gananciales la tenga la mujer en virtud de una resolución judicial».

Con estas normas la nueva legislación impositiva reconoce un hecho económico incontestable en esta época en que la mujer actúa en

todas las manifestaciones de la vida económica del país y, en muchísimos casos, lo hace en sociedades reales y auténticas con su esposo.

La no admisión de las regalías como gasto en el balance impositivo es otro de los puntos en los cuales se establecen substanciales modificaciones con relación al régimen actualmente vigente.

Esta norma representa un avance substancial con relación a la legislación existente, y está establecida en el artículo 14 del proyecto. La disposición está consubstanciada con la filosofía política de nuestro gran movimiento en su lucha por la independencia de las ataduras económicas internacionales, en este proceso de retomar integralmente todos los resortes de la decisión económica.

Muchas de las filiales argentinas de empresas extranjeras y las de capital extranjero radicadas en el país trasladaban utilidades reales a sus países de origen, mediante la concertación de convenios o contratos de asesoramiento técnico, *royalties* por uso de patentes, marcas, fórmulas, etcétera, e incluso como traslación de intereses financieros por aportes financieros. Así enviaban al exterior ingentes sumas que las deducían como gasto en su balance impositivo. La tónica del nuevo gobierno nacional surgido de las elecciones del 11 de marzo fue señalada en esta materia por el ya famoso fallo de la Corte Suprema en el asunto Parke Davis.

Dijo la Corte que: «1. No son deducibles en el balance impositivo de una sociedad argentina las sumas abonadas o acreditadas a una sociedad extranjera —titular del 99,95 por ciento del total de las acciones de la sociedad argentina— en concepto de regalías convenidas por servicios y uso de fórmulas, en razón de la comunidad entre ambas empresas. 2. De admitirse la deducción, la accionista mayoritaria percibiría: a) la retribución por el uso y explotación de marcas y patentes en el país por la sociedad concesionaria de dichas regalías; y b) el monto de las utilidades que ellas produjeron, por la superposición de su calidad de regalista y concesionaria de la regalía en un 99,95 por ciento. Se configuraría así una evidente exención impositiva que la ley no otorga en su letra ni en su espíritu».

Para no fatigar a la Honorable Cámara con la lectura de esta pieza jurídica de significativo valor económico y político, solicito la inserción íntegra del fallo, a esta altura de mi exposición.

—Asentimiento.

## IMPUESTO A LOS REDITOS

### Regalías

*Tratamiento fiscal de las pagadas a una sociedad del exterior, accionista mayoritaria de la sociedad argentina*

Causa: Parke Davis y Cía. de Argentina S.A.I.C. (Corte Suprema de Justicia de la Nación, 31 de julio de 1973).

1. — No son deducibles en el balance impositivo de una sociedad argentina las sumas abonadas o acreditadas a una sociedad extranjera —titular del 99,95 % del total de las acciones de la sociedad argentina—, en concepto de regalías convenidas por servicios y uso de fórmulas, en razón de la comunidad entre ambas empresas.

2. — De admitirse la deducción, la accionista mayoritaria percibiría: a) La retribución por el uso y explotación de marcas y patentes en el país por la sociedad concesionaria de las regalías, y b) El monto de las utilidades que ellas produjeron, por la superposición de su calidad de regalista y concesionaria de la regalía en un 99,95 %. Se configuraría así una evidente exención impositiva que la ley no otorga en su letra ni en su espíritu.

3. — El concepto de la «realidad económica», específicamente aceptado en las leyes impositivas nacionales (artículos 11 y 12 de la ley 11.683), da preeminencia, para configurar la cabal intención del contribuyente, a la situación económica real, con prescindencia de las estructuras jurídicas utilizadas, que pueden ser inadecuadas o no responden a esa realidad económica.

4. — El reconocimiento de la existencia de dos sociedades de capital perfectamente delimitadas conforme al orden jurídico privado y de la personería jurídica de la sociedad local —datos asentados en los principios de derecho como materia societaria—, no es óbice para establecer la efectiva unidad económica de aquéllas y su comunidad de intereses, a través de la «significación económica de los hechos examinados».

5. — A pesar de su aparente autonomía jurídica, la sociedad local se encuentra sin lugar a dudas en relación orgánica de dependencia con la sociedad foránea por su incorporación financiera a la sociedad dominante. Esta relación de subordinación no suprime la personalidad jurídica de la sociedad dependiente; tampoco anula su capacidad jurídica tributaria. Califica una innegable falta de independencia real, con evidentes implicancias en la falta de libertad de elección respecto de los procedimientos contratados y aun de la real utilidad que los mismos puedan reportar, así como de la necesidad de haberlos contratado.

6. — En estricto derecho no puede concebirse la existencia de un contrato cuando, como en el caso, no existen dos sujetos en el negocio jurídico, en sus roles de acreedor y deudor. Si los intereses que concurren al acto no son opuestos, sino concurrentes o paralelos, no existe contrato sino acto complejo. No puede pensarse en la libertad de elección que informa el principio de la autonomía de la voluntad, habida cuenta de la falta de independencia real de las dos empresas vinculadas mediante lo que se ha llamado contrato, pero que en realidad traduce aporte de capital.

7. — El convenio celebrado entre dos Estados en orden a evitar la doble imposición, es un estatuto específico entre dos sujetos del derecho internacional, que se endereza a otorgar un trato a favor de los residentes de ambos estados. Si la admisión de la cláusula antiórgano en los tratados quebrara la coherencia del sistema tributario argentino, al contradecir disposiciones contenidas en nuestra legislación, ello sólo produciría efectos en beneficio de los residentes de los estados contratantes, a los que esta disparidad de tratamiento solamente alcanzaría.

## CONSIDERANDO:

1. — Que la Sala en lo Contencioso Administrativo 2 de la Excelentísima Cámara Nacional de Apelaciones en lo Federal confirmó la sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación que, por mayoría, había confirmado a su vez las resoluciones de la Dirección General Impositiva, de fecha 28 de mayo de 1968, la cual había determinado de oficio diferencias de gravámenes a favor del fisco correspondientes a Parke Davis de Argentina S.A.I.C. por \$ 39.484.811 moneda nacional; en concepto de impuesto a los réditos por los años 1963 a 1967; \$ 6.820.472 moneda nacional por impuesto de emergencia 1962/64 y 1967, por los años 1963, 1964 y 1967; y \$ 6.575.434 moneda nacional por impuesto substitutivo del gravamen a la transmisión gratuita de bienes, por los años 1963 a 1967.

2. — Que interpuestos por la actora los recursos ordinarios y extraordinarios que autoriza la ley, se concedió el primero a fojas 151, de conformidad con el artículo 24, inciso 6, apartado a) del decreto ley 1.285/58, llamada ley 17.116, desestimándose el segundo por aplicación de la doctrina de Fallos: 266, 53; 250, 437; 247, 61, entre otros.

3. — Que en su memorial la actora objeta: 1. La no deducibilidad como gasto por parte de la Dirección General Impositiva de las regalías pactadas entre Parke Davis y Compañía de Argentina SAIC, y Parke Davis and Co., de Detroit (Estados Unidos de América), por servicios y usos de fórmulas acreditadas a nombre de la segunda, accionista en el 99,95 por ciento de la primera, por considerarlas utilidades gravadas en cabeza de ésta y en razón de la comunidad de intereses entre ambas empresas vinculadas. 2. La aceptación por el Tribunal Fiscal de la Nación y por la Cámara Federal a quo del principio interpretativo de la «significación económica» previstos por los artículos 12 y 13 de la ley 11.683, t. o. en 1960 (actuales artículos 11 y 12 de la misma ley). 3. La no aceptación como pauta de interpretación de los convenios celebrados con Suecia (decreto ley 12.821/62) y con la República Federal Alemana (llamada ley 17.349) conforme al artículo 31 de la Constitución Nacional.

4. — Que en apoyo de estas objeciones la actora transcribe en extenso en su memorial el voto de la minoría en el fallo del Tribunal Fiscal y sostiene: a) Que todo contrato de regalía implica de por sí comunidad de intereses; b) Que la existencia de un cointerés entre el titular del derecho y el concesionario de éste, no puede privar de efectos propios a los contratos de regalía previstos en la legislación impositiva, citándose el fallo de la Corte en *Lepetit Sociedad Anónima Química Industrial y Comercial* sobre apelación impuesto a los réditos (Fallos: 280, 112) (D.F., XXI-A, 220). Afirma también que al aplicarse el criterio de la significación económica sostenido por la Cámara a quo en *Compañía Massey Ferguson SRL*, en sentencia del 1º de abril de 1963 (D.F., XIII, 463), expresamente merituado en el fallo en recurso, se tuvo en vista un contrato de regalía celebrado entre un socio mayoritario y una sociedad de responsabilidad limitada, careciendo este tipo de sociedad de la personalidad reconocida en la ley 11.682 para las sociedades anónimas. Añade que si el principio de la realidad económica sólo puede jugar en materia tributaria cuando su aplicación no implique extender exenciones o beneficios a contribuyentes que no estén comprendidos en ellos, conforme se resolviera por la Corte en el caso *Papelera Pedotti Sociedad Anónima* (Fallos: 279, 247) (D.F., XXI-A,

519), tampoco sería viable denegar exenciones o deducciones expresamente admitidas en los artículos 5º, 61, 65 y 68, inciso a) de la ley 11.682, t. o. 1960 (actuales artículos 5º, 60, 64 y 67, inciso a) de la misma ley).

Agrega que el método analógico ha sido desechado en materia tributaria, citando diversos fallos de esta Corte y afirmando que en el caso se lo haría jugar al aplicar una norma que estaría destinada a las utilidades derivadas de los socios o componentes de sociedades de capital (artículo 68, inciso b), ley 11.682). Complementariamente se citan diversos fallos sobre el método interpretativo en la materia. Igualmente sostiene la actora, que la sentencia recurrida habría violado la garantía de legalidad prevista en los artículos 4º, 17, 19 y 67, inciso 2 de la Constitución Nacional y la de igualdad del artículo 16, al desconocerse normas que admiten la distinta personalidad impositiva entre sociedades de capital y accionistas. También existirían dichas transgresiones, aun reconociendo tal distinta personalidad al tratar el caso como ocurrente entre una casa matriz y su sucursal, ya que la legislación admite la posibilidad de que entre tales entes puedan efectuarse operaciones normales.

Se arguye por último, que rechazar la deducción de regalías en base a la vinculación económica «revelaría de parte del legislador argentino una ingenuidad que no puede aceptarse pues nada sería más fácil que eludir dicho criterio, con los distintos subterfugios que señala.

5. — Que mediante acta levantada ante el Tribunal Fiscal de la Nación, las partes convinieron los puntos que constituyen la materia en litigio, solicitando que el pleito fuera declarado como de puro derecho.

6. — Que a los efectos de la justa solución del litigio debe consignarse que el problema de interpretación a dilucidar, consiste en determinar si las deducciones efectuadas por Parke Davis y Compañía de Argentina, en su balance impositivo, en concepto de regalías convenidas por servicio y uso de fórmulas en el campo de la medicina y que deben abonarse o acreditarse a Parke Davis de Detroit, de los Estados Unidos de América, es conforme a las disposiciones de las leyes locales impositivas que regulan ese aspecto de los impuestos. Que a ello se agrega, como elemento propio, si en la estimación de los hechos ha de incidir la circunstancia de que la sociedad norteamericana sea titular del 99,95 por ciento del total de las acciones de la sociedad argentina.

En otros términos, la cuestión a resolver debe ponderar si los importes que pretenden deducirse para el pago de los impuestos reclamados, pueden descontarse como gastos de experimentación y acreditarse en favor de la empresa extranjera, titular de las fórmulas, no obstante que ella sea propietaria del 99,95 por ciento de las acciones que constituyen el capital de la sociedad local.

7. — Que parece conveniente, así mismo, para la mejor valoración del problema de interpretación legal sometido a esta Corte, consignar que de acuerdo al Registro de accionistas de la actora, Parke Davis and Co. de Detroit, era titular en efectivo de \$ 349.817.000 moneda nacional del capital de \$ 350.000.000 moneda nacional de la sociedad argentina y que Pavdarco Inc., también sociedad estadounidense con sede en Detroit, era titular de \$ 176.000 moneda nacional, perteneciendo el resto del capital, por valor de \$ 7.000 moneda nacional a 11 accionistas locales. Todo ello según resulta de las actuaciones administrativas agre-

gadas al juicio en oportunidad de la asamblea general ordinaria del 31 de marzo de 1966, última que se conoce, anterior a la iniciación de la demanda.

8. — Que la argumentación de la recurrente, expuesta más arriba con la síntesis debida, no ha afectado los fundamentos de la sentencia del *a quo*.

Con respecto a la primera crítica a saber, que la Cámara habría aplicado indebidamente la doctrina del caso Refinerías de Maíz S.A., confirmada por la Corte (Fallos: 259, 141) (D.F., XIV, 328), por tratarse en el antecedente de una sociedad de responsabilidad limitada y en el *sub lite*, de dos sociedades anónimas, esto es, de capital y con régimen impositivo propio, cabe consignar que las razones de hecho son semejantes en uno y otro caso. Ya que los regalistas en el primer supuesto, y la regalista en el segundo, eran titulares de la casi totalidad del capital societario. Tal circunstancia impide admitir diferencias sobre la regulación legal que debe aplicarse a los efectos impositivos, existiendo, como existe, en ambos casos, una misma relación o participación en la formación del capital de propiedad en su casi totalidad de los beneficiarios de la regalía.

9. — Que con ello no se desconoce la diferente regulación que para uno y otro tipo de sociedades ha consignado la ley 11.682, sino que se hace aplicación de una pauta de interpretación. Si acepta que el artículo 68, inciso b), de la ley 11.682, hoy artículo 65, citado por el *a quo* al analizar el caso, se refiere a sociedades de hecho o de personas y a las relaciones de sus socios con ellas a los efectos de los rubros deducibles, pero el otro elemento o principio de la «realidad económica», a que también hace referencia la Cámara en su fallo, permite extender aquellas disposiciones al caso sub examen sin que por ello se afecte como pretende la recurrente ni el principio de legalidad en materia impositiva ni el de igualdad, garantía constitucional, ya que el sentenciante se ha limitado a aplicar a situaciones iguales soluciones análogas.

En efecto; ya se trate de sociedades de personas o de capital exclusivamente, en los dos supuestos hay un socio mayoritario en grado de la casi totalidad del capital, que es al mismo tiempo el que ha proporcionado las patentes o marcas e inventos o procedimientos registrados y que, además, se beneficiará en la misma medida con el pago de las regalías consiguientes.

En otros términos, se aceptarse la posición de la recurrente, una misma persona, sea física —si se trata de sociedades de personas— sea jurídica —si es una sociedad anónima—, se beneficiaría como socia de las utilidades derivadas de la inversión y al mismo tiempo, por las acreditaciones que en concepto de regalías se considerarían gastos de la empresa argentina, deducibles como tales.

10. — Que esta cuestión de la existencia de dos sociedades diferenciadas desde el punto de vista del derecho privado, pero unificadas económicamente, conduce al examen de otro problema propio de la materia en recurso, planteado por la apelante: el alcance del concepto de la «realidad económica» específicamente aceptado en las leyes impositivas nacionales (artículos 11 y 12 de la ley 11.683, texto ordenado en 1962).

En el primero de esos artículos se dispone que «en la interpretación de las disposiciones de esta ley o de las leyes impositivas sujetas a su régimen se atenderá al fin de las mismas y a su significación

económica». Este enunciado se perfecciona en el artículo 12, disponiéndose que «para determinar la verdadera naturaleza del hecho impositivo se atenderá a los actos, situaciones y relaciones económicas que efectivamente realicen, persiguen o establezcan los contribuyentes», configurándose la intención legal del precepto en los párrafos siguientes.

Tal regulación normativa da preeminencia, para configurar la cabal intención del contribuyente, a la situación económica real, con prescindencia de las estructuras jurídicas utilizadas que pueden ser inadecuadas o no responder a esa realidad económica (Fallos: 237, 246, 249, 256 y 657, considerando 5, 251, 379 y en la sentencia dictada el 25/8/79 *in re* L.188 Lagazzio, Emilio Francisco s/apelación impuesto a los réditos [D.F., XX(II-A, 452)]).

11. — Que para la recurrente, todo contrato de regalía implica de por sí una comunidad de intereses que no puede privar de efectos propios a dicho negocio jurídico.

Al respecto, cabe tomar en cuenta que por contrato se entiende el acto jurídico bilateral y patrimonial, en el cual están en presencia dos partes, que formulan una declaración de voluntad común con directa atención a relaciones patrimoniales y que se traduce en crear, conservar, modificar, transmitir o extinguir obligaciones. El Código Civil, en el artículo 1.137, no habla de «parte» sino de personas, pero es preciso aprehender el concepto en relación con la clasificación que formula el legislador sobre los hechos y actos jurídicos. Es menester considerar las voluntades en sus diversas direcciones y en cuanto expresiones de un centro de intereses o de un fin propio. El tercer apartado del artículo 14 (hoy 12) del decreto reglamentario de la ley 11.632 se refiere al ajuste de los términos de los contratos de compra y venta, pero parte indiscutiblemente de una premisa: la existencia de tal contrato.

Esta figura jurídica no puede concebirse, en estricto derecho, cuando, como en el caso, no existen dos sujetos en el negocio jurídico, en sus roles de acreedor y deudor. Si los intereses de los que concurren al acto no son opuestos sino concurrentes o paralelos, no existe contrato sino un acto complejo. Además no puede pensarse en la libertad de elección que informa el principio de la autonomía de la voluntad, habida cuenta de la falta de independencia real de las dos empresas vinculadas mediante lo que se ha llamado contrato pero en realidad traduce aporte de capital.

12. — Que para la solución del *sub lite* no se ha desconocido la existencia de dos sociedades de capital perfectamente delimitadas conforme al orden jurídico privado, ni tampoco la personería jurídica de la sociedad local. Pero tales datos, asentados en los principios del derecho común en materia de sociedades, no son óbice para establecer la efectiva unidad económica de aquellas y su comunidad de intereses a través de la «significación económica de los hechos examinados».

La sociedad Parke Davis de Detroit resulta titular del 99,95 % del capital de la sociedad local. De este modo, la retribución por el uso de las fórmulas y procedimientos de que es titular la empresa extranjera, mediante las regalías, también volvería por vía de pago de la casi totalidad de las utilidades, sin que fueran afectadas por el pago de los correspondientes impuestos. El mismo accionista mayoritario vendría a percibir, por su calidad de regalista: a) La retribución por el uso y explotación de marcas y patentes puestas en explotación en el país por la sociedad

local concesionaria de las regalías; b) El monto de las utilidades que ellas produjeran por la superposición de su calidad de regalista y de concesionaria de la regalía en un 99.95 %. En tal forma, computando la regalía como gasto en el balance impositivo de la sociedad concesionaria de ésta, real y evidente exención impositiva que la ley no le otorga ni en su letra ni en su espíritu.

A pesar de su aparente autonomía jurídica, la sociedad local se encuentra sin lugar a dudas en relación orgánica de dependencia con la sociedad foránea por su incorporación financiera a la sociedad dominante. Esa relación de subordinación no suprime la personalidad jurídica de la sociedad dependiente, pero tampoco anula su capacidad jurídica tributaria. Califica una innegable falta de independencia real, con evidentes implicancias en la falta de libertad de elección respecto a los procedimientos contratados y aun a la real utilidad que los mismos puedan reportar, así como a la necesidad de haberlos contratado.

13. — Que no varían estas conclusiones los agravios basados en el voto del vocal disidente del Tribunal Fiscal, que se dejan contestados precedentemente, la doctrina de esta Corte *in re* Papelera Pedotti (Fallos: 279, 247), inclusive el voto en minoría, o el argumento emergente de los convenios suscritos por el país con Suecia y la República Federal Alemana; también analizados por el *a quo* y con cuya valoración, respecto de la situación de autos, se coincide.

14. — Que, como se ha adelantado, el fallo en el caso Papelera Pedotti no da base para la revocatoria que se pretende por la apelante, pues lo que estaba en juego en aquel juicio era la aplicabilidad de las normas impositivas a una fusión de sociedades, ajena por esencia la relación que existe entre las dos sociedades —local y extranjera— en el caso a examen, perfectamente separadas en vista de su regulación legislativa.

15. — Que análogo rechazo merece la invocación que se hace respecto a los derechos reconocidos en las sociedades comprendidas en los convenios celebrados con Suecia (decreto ley 12.821/62) y con la República Federal Alemana (llamada ley 17.249). El reconocimiento de derechos formulado en dichos actos internacionales sólo puede ser aplicado y afecta a los súbditos o sociedades involucradas en esas disposiciones convencionales.

El convenio celebrado entre dos Estados en orden a evitar la doble imposición en un estatuto específico entre dos sujetos del derecho internacional que se endereza a otorgar un trato de favor a los residentes de ambos Estados. Si la admisión de la cláusula antiórgano en los tratados citados quebrara la coherencia del sistema tributario argentino al contradecir disposiciones contenidas en nuestra legislación, ello sólo produciría efectos en beneficio de los residentes de los Estados contratantes, a los que esta disparidad de tratamiento solamente alcanzaría.

Basándose el tratamiento impositivo especial en el principio de la reciprocidad, va de suyo que no resulta afectada la garantía de la igualdad alegada, toda vez que según antigua y reiterada jurisprudencia de esta Corte (Fallos: 16, 118 y 155, 96) el principio de igualdad consiste en que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que se conceda a otros en iguales circunstancias.

Es del caso decir que un fallo de un tribunal argentino únicamente puede enderezarse a establecer la igualdad ante una ley que es la del país, entre empresas sometidas a su propia jurisdicción. Va de

suvo, por lo tanto, que la igualdad reconocida por el artículo 16 de la Constitución no se halla afectada por las disposiciones convencionales invocadas, que regulan exclusivamente a la empresa externa receptora.

16. — Que, por último, ya sea por aplicación de la teoría de la penetración, como esta Corte lo ha hecho tanto en materia no impositiva (caso Gómez, Gerardo contra Comisión Administradora de Emisoras Comerciales y L. S. 82 T. V. Canal 7., inserto en Fallos: 273, 111) cuanto impositiva (Narden Argentina S. R. L., Fallos: 280, 18 [D. F., XXI-A, 218]), como mediante los parámetros del principio de la realidad económica o de la teoría del órgano, de lo que se trata es de la consideración del fondo real de la persona jurídica. Esto se impone no sólo por los abusos a que se presta la complejidad de relaciones y actividades en ciertas estructuras sociales sino también por la dimensión creciente de numerosos grupos de empresas internacionales y los graves problemas jurídicos que su expansión plantea.

Por ello, habiendo dictaminado el señor procurador general acerca de la procedencia del recurso, se confirma la sentencia apelada. Con costas. — Miguel Ángel Berçaitz — Agustín Díaz Bialek. — Manuel Aráuz Castex — Ernesto A. Corvalán Nanclares. — Héctor Masnatta.

**Sr. Díaz Ortiz.** — Precisamente ese argumento que he referido es el que se establece claramente en la norma proyectada. Las prestaciones originadas en contribuciones financieras y tecnológicas, incluso por asesoramiento técnico, suministradas a una empresa extranjera radicada en el país por su casa matriz, otra filial o sucursal, o un tercero económicamente vinculado a las mismas, no serán deducibles en los balances fiscales de la empresa a cargo de dichas prestaciones, debiendo otorgarse a las mismas el tratamiento de utilidades afectadas al pago de la tasa del 47 por ciento que establece el artículo 63, inciso b), del proyecto. Dicho criterio será aplicable aun cuando no se haya probado que la empresa o persona radicada en el país tenga vinculación con el beneficiario de la acreditación o remisión, si el análisis de su situación patrimonial permite concluir que el centro de imputación de sus decisiones no está en poder de sus autoridades naturales, o que el contrato o convenio que dio lugar a aquéllas no hubiera sido celebrado con un tercero según los usos normales del comercio internacional.

Por último quiero referirme al aspecto que se vincula con la introducción de substanciales modificaciones en la ley de réditos, una de las cuales es la inclusión de los dividendos de las acciones en la declaración anual individual.

Es general la aceptación de la necesidad de complementar la tasa aplicable a las sociedades con el impuesto progresivo personal sobre los dividendos. Este principio tuvo general y unánime aceptación en la conferencia técnica celebrada bajo los auspicios de las Naciones Unidas en el año 1951. Se logró allí plena aceptación a la recomendación de la denuncia de las acciones para evitar la evasión, señalándose que la tenen-



cia de acciones al portador, sin ninguna individualización, no podía considerarse un incentivo a las inversiones deseadas.

Podemos decir que este sistema es aceptado por los ordenamientos tributarios más desarrollados, y que las discusiones sobre la imposición a las sociedades de capital dan por supuesto que los dividendos son gravables en manos de los accionistas y giran alrededor de la tributación de la sociedad como entidad separada de ellos.

Con esta exposición doy por concluida la parte inicial de mi informe, agradeciendo a la Honorable Cámara la atención que me ha prestado. (*Aplausos.*)

**Sr. Presidente (Busacca).** — Tiene la palabra el señor diputado Rabanal.

**Sr. Rabanal.** — Señor presidente: he seguido atentamente la exposición del señor miembro informante de la mayoría que puso de resalto lo que a su juicio son los aspectos más salientes de esta ley de impuesto a las ganancias que estamos considerando.

No podría decir, señor presidente, que me puedo substraer de la necesidad de formular una pequeña evaluación acerca de nuestro sistema tributario y fundamentalmente de la forma en que la renta ha sido gravada y será gravada en el futuro.

Resulta indudable que este impuesto a la renta, que a partir de este momento no sé si con absoluta propiedad definiremos como impuesto a las ganancias, precisa de manera acabada una fórmula positiva que grava a las personas físicas e ideales que forman la sociedad en sus manifestaciones de rédito periódico, a los efectos no solamente de subvenir a las necesidades del Estado sino, y más que eso, a producir una redistribución de la renta nacional y de la riqueza del país.

Me voy a permitir reproducir unas palabras del doctor Antonio López Aguado, quien ha sido un eficaz colaborador como integrante de la comisión asesora de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Decía López Aguado: «En todo país civilizado, y hay autores que hacen de esto el descubrimiento de una ley, en la medida en que está avanzado el impuesto a los réditos puede considerárselo adelantado. No sé si es rigurosamente exacto o no, pero desde ya califica a quienes sostienen que hay que eliminar el impuesto a los réditos; no conocen suficientemente la historia tributaria del mundo. No conozco, en primer lugar, ningún país en el que se haya suprimido el impuesto a los réditos, pero sí conozco algunos en los que todavía no hay posibilidad de imponerlo. Tenemos cuarenta años de experiencia y de jurisprudencia al respecto y pretender erradicarlo sería ocasionar una lesión tremenda al sistema tributario, con gran perjuicio para los sectores más débiles económi-

camente, porque cualquier sistema por el que se pueda optar para suplir ese recurso será con una mayor traslación sobre los precios».

Con estas breves palabras, López Aguado quizá pudo resumir todo el trascendente contenido de este impuesto, porque lo que expresó es rigurosamente exacto: no resulta fácil admitir frente al estado socioeconómico del mundo un país adelantado, civilizado y progresista donde no se haya establecido el impuesto que grava los réditos. También es cierto, señor presidente, que existen algunos en los que resulta difícil aplicarlo porque los grupos dominantes, las minorías que existen en todos los continentes, impiden que elementos realizadores como el del impuesto a los réditos puedan llegar a concretarse.

Adviértase que en la Argentina, desde hace ya muchos años —cuarenta años, para ser más preciso—, tenemos la posibilidad de contar con este instrumento redistribuidor. Además, tenemos que señalar la progresividad del impuesto a los réditos como uno de sus aspectos positivos.

El padre de la economía, Adam Smith, sostenía que los impuestos debían ser proporcionales al ingreso, vale decir, que todos debían pagar en concepto de impuestos el mismo porcentaje de su ingreso. Es indudable que el mundo ha avanzado desde estos primeros intentos de ciencia económica, y hoy advertimos cómo en virtud de un proceso de progresividad en las tasas, se va logrando una paulatina transformación de la economía.

El impuesto que hoy consideramos tiene la ventaja de no ser trasladable en forma inmediata, pues carece de las características negativas de los impuestos indirectos. Es sabido que estos últimos son directamente trasladables a los precios —por eso a muchos de ellos se los conoce como impuestos al consumo—, de modo que son soportados en forma igualitaria por toda la población, sin consideración a la capacidad económica de los habitantes.

Como decía, el impuesto que ahora consideramos, por no ser trasladable, tiene la posibilidad de tomar en cuenta la posibilidad contributiva de cada persona. Dice al respecto el doctor Enrique García Vázquez, otro de nuestros importantes asesores en la comisión, en un artículo publicado en la revista «Derecho Fiscal», que «de acuerdo con la doctrina tradicional el impuesto a los réditos no es mayormente trasladable, y por lo tanto puede aplicársele buscando la equiparación de sacrificios, teniendo en cuenta la capacidad contributiva de cada persona. Es muy importante que esta característica prevalezca en el más importante de los gravámenes del sistema impositivo nacional para que éste adquiera alguna progresividad, ya que otros impuestos del sistema son francamente regresivos».

Precisamente por esto, por la posibilidad de hacer de este gravamen un instrumento realiza-

dor —pese a que se lo ha atacado en más de una ocasión—, los hombres de la Unión Cívica Radical lo apoyamos con todo entusiasmo.

Entendemos que la Argentina no puede escapar a los preceptos de la ley de Wagner, según la cual a medida que los países incrementan su riqueza crece también la parte proporcional que de ella se apropia el Estado. Pero no es menos cierto que esto, que es toda una formulación económica pero que escapa a la economía para introducirse en el ámbito de la política, señala que esa porción de la riqueza nacional que llega a manos del Estado debe ser distribuida con el criterio social que requiere una población ávida de transformaciones y de nuevas posibilidades para un continuo ascenso en la escala social.

Vamos a analizar el impuesto a las ganancias con la absoluta certeza de que estamos dando al país un nuevo instrumento tributario, pero al mismo tiempo asignándole un sentido extrafiscal como herramienta para estructurar la transformación argentina.

Hace unos momentos escuchaba al señor diputado Díaz Ortiz señalar los aspectos del proyecto que en su opinión resultan más salientes. Pero quiero decir, señor presidente, que si bien es cierto que este proyecto apunta a ese contenido social, que yo estoy seguro que el diputado preopinante quiere que tenga toda esta legislación que se comienza a diseñar a partir del 25 de mayo, no es tan así, porque en nuestra opinión no se considera dentro del proyecto el ajuste automático y general de los patrimonios.

Señor presidente: en la Argentina hasta ahora ha sido posible únicamente una actualización o ajuste en los activos fijos. Pero tales activos, por rara paradoja, están en manos de empresas que tienen una dimensión muy grande o importante, o pertenecen a ciudadanos de otros países. La industria nacional es, en su mayor medida, una industria de pequeño y mediano volumen; y todo su activo lo tiene en inventarios y cuentas a cobrar.

Esto significa que posibilitando únicamente la revaluación de los activos fijos, nosotros estamos favoreciendo a aquellas empresas de capital intensivo —que no son, precisamente, la inmensa mayoría de las empresas de capital nacional—; y estamos dejando de lado a las de mano de obra intensivas, que corresponden a las empresas que siempre han apuntalado y consolidado el esfuerzo argentino.

Es por eso que en este momento —y esto ya lo adelanté en las reuniones de la Comisión de Presupuesto y Hacienda— habremos de proponer un nuevo artículo con la siguiente redacción: «A partir del 1º de enero de 1975, para la determinación de la materia gravada se ajustarán los activos y pasivos de manera general y obligatoria, quedando sin efecto el actual sistema de actualización parcial de los rubros de activo de uso».

En la comisión, los funcionarios del Poder Ejecutivo nos señalaron que resultaba engorroso y difícil determinar el procedimiento para concretar esta actualización general del patrimonio, motivo por el que a esta norma no se la incorporaba en este momento en el contexto de la ley.

Nosotros entendemos que la actualización integral no resulta de fácil realización, en cuanto a la determinación del sistema normativo a adoptarse para su implementación. Es por eso que facilitamos la labor del Poder Ejecutivo, pues le concedemos la posibilidad de disponer de todo un año para organizar el nuevo sistema, que entraría a regir recién en 1975. De esta manera no entorpecemos de forma alguna lo que pueden ser circunstancias positivas contenidas en el proyecto en consideración, y que nosotros compartimos.

Tiene razón el señor diputado Díaz Ortiz cuando señala que uno de los aspectos destacados del proyecto es que incluye —dentro del viejo concepto de réditos— a las rentas de capital. Estas eran gravadas anteriormente por el impuesto a las ganancias eventuales. Ahora pasan a formar parte de una quinta categoría de rentas, en el contexto del proyecto que estamos considerando.

Pero si bien es cierto que la doctrina se ha pronunciado reiteradas veces por este sistema —que también se ajusta a la verdad, como lo ha propiciado la Unión Cívica Radical—, no es menos cierto que la forma en que se lo ha tratado en la redacción que contiene este proyecto nos priva de encontrar algunos medios que resulten más justos para la tributación. En general, las rentas de capital no se producen en un período fijo sino que, por el contrario, exceden el año fiscal que comprende la respectiva declaración jurada. Consecuentemente, querer incluir —mediante una declaración de un lapso fijo, en este caso de 12 meses— el plus obtenido por esa renta de capital, no se ajusta a un manejo equitativo del sistema tributario. Entendemos que debe realizarse un promedio de esta renta de capital y que se la debe distribuir en un lapso que alcance a los cinco años.

Si tomamos por ejemplo una renta de capital de 100 e hiciéramos la tributación dividiendo esta renta de capital por cinco, nos daría 20. Si hacemos esa tributación en 120 y apelamos a la escala incluida en la ley para saber cuál es el porcentaje que deben abonar estos 120 y luego a este excedente que se produce como consecuencia de la renta de capital lo multiplicamos por 5, crearíamos una fórmula que se ajustaría un poco más a la equidad que queremos darle al impuesto.

Pero, puede ocurrir que, a pesar de las previsiones puestas en la ley, la renta de capital haga que el monto imponible exceda la tasa normal que la capacidad contributiva del obligado pueda

soportar y entremos en un proceso injusto en materia tributaria, lo que, estoy seguro, no ha sido la intención ni el criterio sustentado por la bancada de la mayoría.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 2º de la Honorable Cámara, doctor Isidro J. Odena.

**Sr. Rabanal.** — El señor diputado Díaz Ortiz, al referirse a uno de los aspectos que más polémica ha suscitado entre los distintos sectores interesados y los diversos centros de estudios que se ocupan de la materia tributaria, que es la forma de imposición de las sociedades de capital, decía bien cuando afirmaba que las posibilidades de que se impongan estos dividendos de las sociedades de capital no solamente en cabeza de la sociedad, sino también en cabeza de los accionistas, es un paso adelante. Creemos que es así, pero también pensamos que habrá que encontrar fórmulas para que, mediante este procedimiento de imposición no se ataque una posible capitalización que puedan realizar las empresas. Esta capitalización para una inversión futura es indispensable en la Argentina porque, precisamente, uno de los elementos más negativos que tiene nuestro proceso económico es la carencia de inversión, ya que la Argentina necesita en todos los campos una importante inversión para concretar su desarrollo.

Considero que habría que encontrar algún sistema para que el artículo 64 posibilitara que esta inversión no se perjudique. A tal efecto, proponemos la siguiente redacción del artículo: «Los beneficios impositivos de ejercicio obtenidos por las entidades comprendidas en los apartados 1, 2 y 4, del inciso a) del artículo anterior, no distribuidos dentro de los plazos que fije el Poder Ejecutivo, estarán sujetos a la tasa del 29,5 por ciento, que se reducirá al 10 por ciento en la medida que dichos beneficios se destinen a aumentar durante el ejercicio la inversión fija neta reproductiva de la empresa (maquinaria, equipos, etcétera)».

»Se entenderá por beneficio impositivo no distribuidos al monto que resulte de deducir de los beneficios netos imponibles del ejercicio: a) el impuesto establecido en el artículo anterior que recaiga sobre los mismos; b) el importe destinado en el ejercicio a constituir el Fondo de Reserva Legal; c) el monto de los dividendos en efectivo o en especie —incluidas acciones liberadas— puesto a disposición de los accionistas.

»El gravamen ingresado conforme a lo dispuesto precedentemente dará lugar a un crédito de libre disponibilidad a favor del responsable en la medida en que se configure la posterior distribución de dichos beneficios, a cuyo efecto se considerarán distribuidos en primer término los que han abonado el 29,5 %

»A los fines indicados y previstos en el inciso c), del segundo párrafo, los dividendos se considerarán integrados en primer término con beneficios impositivos.»

De esta manera entendemos preservar la posibilidad de inversión fija neta reproductiva de la empresa.

Con estas palabras circunscribimos perfectamente el sentido del artículo que hemos propuesto, porque de ninguna manera queremos beneficiar a quienes extraigan los fondos de la sociedad para darle un destino suntuario o que no se relacione con el crecimiento nacional, sino que, por el contrario, a través de esta inversión fija neta reproductiva de la empresa se facilite la inversión en las empresas argentinas.

En cuanto a las tasas contenidas en la escala del artículo 97, creemos que no se han contemplado perfectamente las inquietudes que expusimos en la comisión. Sé que eso ha sido materia de ardua tarea por parte del Poder Ejecutivo, y sé también que algunos miembros de la comisión honoraria asesora, como los doctores Vázquez y Allegue, han trabajado seria e intensamente en este problema.

Desconozco si las posibilidades presupuestarias del Poder Ejecutivo permiten la modificación de esta tabla.

Esta mañana, por medio de los diarios, advertí que quizás la explicación se encuentre en el proyecto de presupuesto que va a ser enviado a esta Cámara, fundamentalmente entre los recursos del Tesoro nacional.

De acuerdo siempre con la información periodística, los recursos tributarios aumentaron de 18.710 millones, que significan el 75,6 por ciento de los recursos, a 27.199 millones. Es decir que el incremento de los recursos tributarios es de 8.489 millones de pesos y el aumento para afrontar el presupuesto de 1974, de esos mismos recursos, es del orden del 45,3 por ciento. A pesar de este incremento, todavía estamos con un déficit de 13 mil millones de pesos. Presumo que uno de los motivos de la forma en que ha sido diagramada esta escala es la de una necesaria activación de la recaudación que tiene el Poder Ejecutivo.

No nos preocupa el coeficiente del 45 por ciento para la última escala o como tasa marginal, pero sí nos preocupa que lleguemos rápidamente a este porcentaje, que alcanzará a quienes tengan una ganancia neta imponible de 170.000 pesos en adelante. Para nosotros habría resultado más ajustado haber podido establecer escalones que hubieren hecho más fácil la protección de los sectores medios de nuestra población, porque dentro de los sectores populares y de los sectores medios es donde se afirma no sólo todo el proceso nacional de nuestra economía sino la inmensa base popular sobre la que se sustenta un programa que, como bien dijera recién el señor

diputado Díaz Ortiz, ha sido apoyado por más del 80 por ciento de la población en el último pronunciamiento popular.

Por eso, nuestra preocupación no apunta a la protección de las escalas mayores, pues nunca ha sido ésa la posición de la Unión Cívica Radical.

**Sr. Lima.** — ¿Me permite, señor diputado, una interrupción?

**Sr. Rabanal.** — Sí, señor diputado.

**Sr. Lima.** — En realidad, señor diputado, la escala proyectada sufrió una reducción en el seno de la comisión. De todas maneras, esto tiene una finalidad, que es la de hacer frente al estado de emergencia por que atraviesa el país, a tal punto que se delega en el Poder Ejecutivo la facultad de reducir en el momento oportuno, cuando se haya superado esta situación de emergencia, las escalas ahora proyectadas.

Por lo tanto, no puede hacerse una argumentación como si estas escalas se establecieran para siempre. Ellas obedecen, como lo ha reconocido el señor diputado, a conjugar el déficit fiscal, en cierta manera. La presión tributaria se ha llevado a un nivel compatible con las posibilidades económicas de la población en estos momentos.

**Sr. Rabanal.** — ¿El señor diputado quiere decir que es compatible con el poder de pago de la población?

**Sr. Lima.** — Sí, señor diputado.

**Sr. Rabanal.** — Ojalá que esté en lo cierto.

**Sr. Díaz Ortiz.** — ¿Me permite una interrupción, señor diputado Rabanal?

**Sr. Rabanal.** — Sí, señor diputado.

**Sr. Díaz Ortiz.** — También es necesario tener en cuenta que todo esto debe analizarse en función relativa. Sería interesante poder exhibir en este momento las curvas de la presión tributaria que representa el actual impuesto a los réditos y las que resultan, en definitiva, en virtud del artículo 97 del proyecto. Es indudable que con respecto a la actual presión tributaria la escala que propone este proyecto significa una sensible mejora para los sectores de ingresos menores y medianos. Los gráficos reflejan esto de manera muy clara y expresiva.

Quiero decirle al señor diputado Rabanal que nosotros estaríamos de acuerdo en una reducción de las tasas, pero ello debe relacionarse con tasas anteriores que tenían una presión tributaria mucho más grande y que se distribuían en forma mucho más desigual. Es decir, es necesario plantear el problema en función de la relatividad de los términos, o sea, de la coyuntura.

**Sr. Rabanal.** — Es cierto que los gráficos demostrativos de las escalas merecieron la preocupación del señor diputado Díaz Ortiz, del diputado que habla y de todos los miembros de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Es cierto también que el Poder Ejecutivo accedió a una

rebaja con respecto a la escala que figuraba en el mensaje y proyecto de ley original. Entiendo que no podía ser de otra manera, tratándose de un gobierno de neta extracción popular como el que rige los destinos del país, o sea, que tiene que responder a los reclamos que nosotros formulemos en esta materia en nuestra condición de representantes del pueblo.

Pero yo me refería a la preocupación en los primeros tramos, aquellos que apuntan precisamente a los sectores de más baja renta. Nosotros podríamos haberlos favorecido aún más, si eso es lo que pretendemos. Esto lo expreso en función de lo que prevé, como recargo excepcional del 20 por ciento para el año 1974, el artículo 108 del proyecto en examen. Vale decir que, como dije antes, no solamente afirmo que la curva prácticamente se transforma en una recta a partir de los 170.000 pesos, sino que también llegamos muy rápidamente a esa cifra con escalones muy chicos, mejor dicho, escalones cortos. De esa manera, vemos privada la posibilidad de ver apoyados a los sectores de menores recursos, que tienen una renta en crecimiento, como consecuencia de que en nuestro país hay grupos humanos importantes que tienen la posibilidad de conformar una clase media que es la que sustenta indiscutiblemente el proceso que nosotros tenemos que tratar de afirmar en la República.

En consecuencia, señor presidente, entiendo la preocupación de los señores diputados del Frente Justicialista, no solamente en función de la representación que ejercen, sino de la necesaria defensa de una línea que ha fijado el Poder Ejecutivo.

Hubiera resultado quizá más ajustado haber tratado este paquete de medidas teniendo pleno conocimiento del presupuesto nacional, del que sólo conocemos algunas cifras, que han sido enunciadas en el día de ayer. Además, hubiese sido importante conocer en qué van a ser invertidos los fondos que le estamos entregando al Poder Ejecutivo, a través de todo este aparato tributario.

También hubiese resultado muy útil contar con el plan trienal —que sabemos es una de las preocupaciones del gobierno—, que fijará las pautas del desarrollo y en qué sectores se va a dar con mayor vehemencia.

Por lo tanto, si hubiésemos contado con el tripode formado por el paquete de medidas tributarias, por el presupuesto nacional y por el plan trienal, hubiéramos podido formular un verdadero análisis de la economía argentina. De esa manera se hubiese esclarecido un poco más este presupuesto que nosotros estamos manejando de si la tasa y la escala se acomodan o no a un sentido futuro.

**Sr. Lima.** — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

**Sr. Rabanal.** — Sí, señor diputado.

**Sr. Lima.** — Le solicito al señor diputado Rabanal que me aclare si sostiene que el ensanche de la cantidad de contribuyentes es lo que afecta a este proceso.

**Sr. Rabanal.** — No, señor diputado, eso no es lo que yo he expresado. Mi posición sustenta la tesis de proteger, mediante las escalas a aplicar, a los grupos menores y medio. A su vez, manifiesto que no me afectaría que se gravara más fuertemente a aquellos contribuyentes con rentas importantes. Además, he señalado que se llega, a través de la escala a aplicar, muy rápidamente a los 170.000 pesos, que es donde la curva se transforma en una línea recta.

**Sr. Lima.** — La escala a aplicar tiene una base matemática, señor diputado.

**Sr. Rabanal.** — El señor diputado Lima sabe que he dialogado, con sumo placer, tanto con él como con todos los demás miembros de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en las reuniones que tuvimos, y aceptaré las interrupciones que me soliciten en función de la aclaración de este tema, que indudablemente nos preocupa a todos.

Lo que no deseo, señor presidente, es que esta tabla y el impuesto en general tengan un fin exclusivamente fiscalista sino que también apunten a un sentido socioeconómico y a un criterio político en su manejo. Por eso expresé que si conociéramos el destino que va a tener la recaudación que pudiéramos brindar al Poder Ejecutivo a través de estas medidas impositivas, yuviéramos en nuestro poder el presupuesto y el plan trienal, podríamos tener una visión mucho más clara. Lo que nos preocupa es que con un incremento del 45 por ciento en los recursos tributarios, todavía no sepamos acabadamente cuál va a ser su destino.

Continuando con mi exposición, recién hacía referencia al recargo que se prevé en el artículo 103 del proyecto de ley, que ha sido hecho exclusivamente con fines fiscalistas. Es la reedición reducida en su monto del 30 por ciento del impuesto de emergencia que propició el ministro Wehbe. Vale decir que simplemente apunta a superar una coyuntura económica, demostrando al país que el manejo financiero durante el gobierno militar que terminó el 25 de mayo no fue tan desastroso o, por lo menos, lo fue en grado menor.

No entiendo cómo dentro de una legislación de un gobierno constitucional, que tiene otro tipo de recursos y que también tiene instrumentos como el de toda esta reforma tributaria, se mantiene este recargo de emergencia del 20 por ciento. Nosotros propiciamos su supresión porque, por ser indiscriminado, por ser proporcional, como decía nuestro maestro Adam Smith, será pagado por todos por igual sin tomar en consideración la capacidad contributiva de cada uno. Es en este recargo del 20 por ciento donde se quiebra fundamentalmente la progresividad de toda la escala, progresividad que fue motivo

de elogio por parte del señor diputado preopinante y que es compartido por nosotros porque todo el sistema tributario debe apuntar a ello. Por eso no comprendemos, repito, la razón del mantenimiento de este recargo excepcional y coyuntural del 20 por ciento.

Estas son las observaciones, de carácter global, que deseo formular con respecto al proyecto en consideración. Sin perjuicio de ellas, quiero decir que en la comisión hemos actuado con un alto grado de comprensión en cuanto a la receptividad de nuestras inquietudes por parte del Poder Ejecutivo. Un alto porcentaje de esas inquietudes han sido tomadas de las proposiciones de los legisladores de la Unión Cívica Radical y volcadas en el dictamen. Por ejemplo, la inclusión de los miembros de los tribunales de cuentas fiscales de las provincias entre los que no están sujetos al gravamen. De esta manera estábamos afirmando este proceso de volcarnos hacia el interior, receptando una inquietud que ya había sido puesta de manifiesto por los funcionarios de los tribunales fiscales de Córdoba y Salta, de la que habían sido portadores los señores diputados Zamanillo y Azurmendi, que me la hicieron llegar.

Dentro de las deducciones, no se explica el motivo por el que dentro del inciso c) del artículo 23 no se incluyan los gastos de salud y de estudio, fundamentalmente, porque estas deducciones permitirían, en el caso de los gastos de salud, reconocer una realidad, y en el caso de los estudios, favorecer un proceso educativo, en relación al cual sabemos que en este recinto no ha de haber nadie que se oponga a tal incentivo.

Creemos que también debe ser objeto de aclaración el inciso c) del artículo 48, que incluye entre las ganancias de la tercera categoría «las derivadas de la actividad de comisionista, rematador, consignatario y demás auxiliares de comercio no incluidos expresamente en la cuarta categoría». Si nos remitimos a la legislación común, advertimos que el Código de Comercio, en su artículo 87, establece quiénes revisten la condición de auxiliares de comercio, enumerando a los corredores, los rematadores o martilleros, los barraqueros, los administradores de casas de depósito, los factores o encargados y dependientes de comercio, los acarreadores, portadores o empresarios de transporte. Como se puede apreciar, existen algunos auxiliares de comercio, entre los indicados por el código, cuyas ganancias podrían entrar en la cuarta categoría, por lo que entiendo que deberíamos fijar claramente que los «demás auxiliares» son tales y cuales incorporando en este inciso c) del artículo 48 no una expresión genérica sino definida acerca de cuáles son los auxiliares de comercio realmente alcanzados por la disposición.

Otra modificación que entendemos positiva —acerca de la cual el doctor López Aguado hizo una interesante exposición en la comisión— es

la incorporación de cláusulas sobre los métodos de determinación del balance impositivo. En la norma respectiva del proyecto originariamente enviado por el Poder Ejecutivo no se establecía con claridad cuáles debían ser tales métodos de determinación, dejando la cuestión librada a la reglamentación. Por nuestra parte, pensamos que este aspecto del impuesto corresponde al resorte exclusivo del Congreso.

En el artículo 65 también se ha mejorado la redacción de la norma legislativa. Se dispone que para la aplicación de la tasa del 29,50 por ciento sobre las utilidades no distribuidas de las sociedades de capital se tomará en cuenta la circunstancia de que se entenderá por distribución de los beneficios la puesta de los mismos a disposición a favor de los accionistas, reemplazándose lo que disponía el artículo 65 en la anterior redacción, que hablaba de la efectiva percepción de los dividendos por parte de los accionistas, dejando en alguna forma librada a la voluntad de éstos la efectiva percepción de la renta y, consiguientemente, la generación del acto imponible.

En resumen, son muchas las inquietudes que han sido recogidas en el dictamen de la comisión, en tanto que otras han quedado como meras intenciones, registradas en las actas de la comisión. Deseo sí señalar que el artículo 111, desde el punto de vista legislativo, es poco ortodoxo, pues al modificar el artículo 60 de la ley 13.273 incorpora a un estatuto orgánico, como es éste de la legislación relativa a imposición de las ganancias, una modificación a una ley que no se refiere concretamente a las ganancias, sino al régimen de promoción forestal.

Espero, recogiendo las palabras del señor diputado Díaz Ortiz, que ésta sea una de las únicas deducciones. En esta materia las primeras deducciones datan del año 1943 y estaban referidas a los astilleros. Posteriormente, y de manera inocente, fueron ingresando otras a la ley de réditos, para llegar, como dijera el doctor Rodríguez Silva, si mal no recuerdo, al orden de las 139. Es decir, que de esta manera se ha desvirtuado toda la estructura del sistema de la imposición a las rentas.

Además, este artículo 60 nuevo, tal cual está redactado, no sólo no se acomoda a la ortodoxia legislativa, sino que, por el contrario, si leemos atentamente su texto, advertimos que se introduce la posibilidad de una duplicidad en las deducciones, porque dice así: «Para practicar el balance impositivo del impuesto a las ganancias se podrá tomar como precio de inventario de las plantaciones el que resulte de adicionar anualmente al costo de los mismos el aumento de valor de la madera que para cada especie fije o acepte la Dirección General Impositiva. El mayor valor así obtenido, sin perjuicio de resultar computable como costo en la oportunidad de la venta de la madera, será deducible en la deter-

minación del impuesto del año en que se produzca dicho aumento de valor, en la forma que determine la reglamentación.

»Serán deducibles, para la determinación de la materia imponible en el impuesto a las ganancias, las sumas que se inviertan en plantaciones forestales, ya sea en forma directa o a través de integración de acciones, bonos, certificados o cualquier otro tipo de valores destinados a financiar las inversiones.

»A los efectos indicados precedentemente, se considerará integración de acciones la percepción de dividendos en acciones liberadas, cuando las utilidades con que se integran se destinan a la forestación.»

Es decir, señor presidente, que en el segundo párrafo de este artículo, que substituye al artículo 60 de la ley 13.273, se establece la deducción por todo lo que se invierta en plantaciones forestales, y en el tercer párrafo se establece otra deducción por las utilidades o dividendos que estas mismas plantaciones puedan producir.

Considero que esta duplicidad en las deducciones determina una injusticia que esta Cámara no puede receptor, y con estas palabras dejo plasmadas las preocupaciones de nuestro bloque en esta materia.

Creemos que este impuesto debe mantenerse con su pristine limpieza y sin fines extrafiscales. También nos hacemos eco de la inquietud del señor diputado Ferrer en el sentido de que deben suplirse en otras leyes específicas las deducciones que son suprimidas del impuesto a las ganancias, porque no pueden dejarse desprotegidos otros sectores que requieren el apoyo tributario de la Nación para poder desarrollar sus actividades.

Con una limpia legislación, como la que ha querido hacerse, aun con fallas como las que hemos señalado, estaremos afirmando un proceso quizá diferente, más justo, más equitativo, más progresista y menos regresivo en nuestro sistema tributario.

Se han planteado también otras iniciativas referidas por ejemplo, a la nominatividad de las acciones y al impuesto al capital y al patrimonio. Este último tributo grava algunas manifestaciones de riqueza que pueden no ser alcanzadas por este impuesto a las ganancias, y que se complementaria con el impuesto al valor agregado. Todo esto con el objeto de conformar una estructura tributaria cuya modificación ya solicitara nuestro bloque a través de un proyecto de declaración oportunamente presentado ante la Honorable Cámara, y cuyas pautas básicas ya fueron señaladas por el presidente de nuestro bloque, el doctor Tróccoli, al hacer el análisis general de este paquete de leyes impositivas.

En definitiva, con un sistema tributario que apunte a ampliar la base imponible, que se estructure con más justicia y con más limpieza,



esperamos que este gobierno tenga los recursos genuinos necesarios para realizar la transformación a la que tanto los señores diputados de la mayoría, como nosotros, los hombres de la oposición, nos hemos comprometido con el país. De este modo estaremos demostrando, en definitiva, que el compromiso del 11 de marzo, reiterado el 23 de septiembre, no fue simplemente un esfuerzo realizado para la obtención de una victoria sino el comienzo de un camino que nos llevará a la transformación nacional. (*Aplausos.*)

**Sr. Presidente** (Odena). — Tiene la palabra el señor diputado Sandler.

**Sr. Sandler.** — Señor presidente: conforme con la posición fijada en la reunión del día martes, en la que fijáramos una serie de críticas al esquema filosófico del sistema impositivo propuesto, tendríamos que decir —desde luego— que en líneas generales no participamos del proyecto tal como ha sido elaborado porque él está condicionado por la perspectiva global del sistema adoptado.

Si nosotros hubiésemos conseguido reorganizar el sistema impositivo, no hubiésemos dictado una ley de impuesto a los réditos, o a las ganancias, como se lo llama ahora, tal como está proyectada, sino que hubiésemos condicionado su propia estructura interna.

Así, por ejemplo, en los contribuyentes de la primera categoría, que en el actual proyecto y en las tradicionales leyes de impuesto a los réditos son referidos como ganancias provenientes de la renta del suelo, hay en la norma que estudiamos una mescolanza, por así decirlo, de bienes. Está el suelo, considerado como cosa material, fija por su naturaleza, de acuerdo con los términos del artículo 2314 del Código Civil, junto a las mejoras, o sea las construcciones que se implementan sobre la tierra y que conforme con criterios económicos son bienes de capital, cosas muebles, trabajados por el hombre y afinados en el suelo.

En este proyecto no podría haber ninguna separación al respecto, porque el sistema impositivo está aún condicionado por un esquema general.

Lo mismo se observa cuando se habla de las ganancias especiales y se hace referencia particularmente a las explotaciones agropecuarias. Aquí se encuentra la exclusión de las zonas boscosas, de las zonas urbanas y de las zonas que van a ser urbanizadas, realizándose una distinción jurídica por medio de la legislación impositiva que no resiste un análisis de tipo económico. También estos bienes deben ser gravados y no excluidos.

Diría, señor presidente, que aun si se aceptara el supuesto que nosotros propiciamos de gravar directamente el valor del suelo sin distinciones topográficas, con un impuesto directo y simple, tendríamos que reestructurar la textura interna de esta ley. Sin embargo, esta posición global que ya formulamos antes de

ahora y que no vamos a repetir, no puede entorpecer el análisis del proyecto de ley que virtualmente tenemos que considerar como aprobado, detalle más o detalle menos, porque es coherente con las otras leyes que se han tratado y que se han propuesto.

En este punto no puedo dejar de señalar, a pesar de las críticas generales, la sensible diferencia que media entre el proyecto elaborado finalmente por la Comisión de Presupuesto y Hacienda y el proyecto inicialmente remitido por el Poder Ejecutivo. Estas diferencias son de orden cualitativo y cuantitativo.

Desde el punto de vista general el proyecto de la comisión, que el señor diputado Díaz Ortiz acaba de informar, es superior al proyecto inicialmente remitido por el Poder Ejecutivo. Desde este punto de vista, el Parlamento ha rescatado una facultad originaria muy importante, tal como lo señalé en mi disertación del día martes. Cualitativamente —dicho esto en términos concretos y no genéricos— es visible que el proyecto de la comisión señala con mucha más nitidez, precisión y eficacia la responsabilidad de la filial respecto de la matriz. Y esto, después del fallo citado por el miembro informante, el caso Parke Davis, que ya es conciencia nacional, permite tener acabado criterio de las implicancias que guarda este problema con la dependencia económica. Es muy feliz la fórmula encontrada por el proyecto de la comisión, ya que a través de un par de artículos, particularmente el 14 y el 15, se distingue entre matriz y filial con total claridad.

Creo que también significa un progreso digno de ser señalado el haber incorporado realísticamente, creo que este es el término, la noción de los índices de actualización a través del costo de vida obtenidos por la Dirección de Estadística y Censos.

En los artículos 22 y 96 imperativamente se obliga a este reajuste, y esto es realmente buena apertura del criterio de esta ley impositiva a la realidad.

Es cierto que hay síntomas de que la inflación ha sido frenada; ojalá mediante las distintas medidas que se han tomado sea detenida definitivamente, pero todos sabemos que la aceleración inflacionaria no se detiene de un día para el otro. Esta ley, que pretende tener una vigencia decenal, debía contener una norma como ésta, y afortunadamente la ha incorporado.

Es sumamente atinado que se haya incorporado una norma como la del artículo 51, que, creo que lo ha dicho el señor diputado Rabanal, fue inspirada por el doctor López Aguado, circunstancia que yo desconocía. En esa disposición se reglamenta con toda precisión, más allá de su contenido, en relación al cual puede haber discrepancia, cómo se debe elaborar el balance impositivo. Delegar esta facultad en el Poder Ejecutivo —y sin que esto signifique echar ningún tipo de sospecha sobre la conducta del

**Poder Ejecutivo**— implica delegar facultades impositivas en el poder administrador. Esto implica que, llevado por sus propias necesidades —legítimas, por supuesto—, la reglamentación del balance impositivo podría haber significado en los hechos una delegación de las facultades de nuestro Poder Legislativo.

De tal manera que realmente felicito a la comisión, y lo subrayo, por haber reglamentado tan detalladamente las normas sobre confección del balance impositivo.

También desde un punto de vista social justiciariamente introduce la desgravación para la construcción de viviendas por el artículo 110.

Más allá de si es suficiente o insuficiente, creo que señala una distinción que yo creo necesaria en el impuesto a los réditos entre lo que es bien por naturaleza inmueble y lo que es capital o mejora. El hombre que trabaja y construye su casa hace una inversión y tiene que ser desgravado.

Desde el punto de vista cuantitativo —y son todas estas las felicitaciones iniciales para la comisión— hay dos aspectos que también tienen que ser puntualizados. En primer lugar, la rebaja genérica de las tasas; se han rebajado unas más otras menos, pero los artículos 63 y 108 también significan una rebaja de las tasas impositivas que es complementada y auxiliada por el aumento del mínimo no imponible de los artículos 23 y 86.

Es decir que se ha liberado a una mayor cantidad de personas, lo que es altamente positivo porque esta ley, más allá del cuestionamiento crítico general que formulé antes de ahora, para que no sea dañina y para que resulte lo más útil posible dentro de sus limitaciones tiene que tomar en cuenta dos datos muy precisos de la realidad concreta de la República Argentina.

Y esta realidad concreta, no la teórica que se puede encontrar en algún libro de texto, sino la realidad que se ha ido construyendo históricamente en los últimos años, nos demuestra que, en primer lugar, las formas económicas argentinas reales y concretas han tomado incisivamente la forma oligopólica o monopolítica del dominio del mercado interno, algunas veces por grupos nacionales pero lamentablemente mucho más por grupos internacionales. Esta es una realidad, y la presencia de monopolios y oligopolios como formas ordinarias actuantes en el proceso económico no es otra cosa que el reconocimiento de la inserción violenta del poder —no me refiero al poder político, sino a los intereses económicos— dentro del orden económico. Este poder se traduce inexorablemente en la facultad que tienen los monopolios u oligopolios de imponer por la fuerza el precio de los productos que necesitan los consumidores.

Este primer dato de la realidad es gravísimo, porque si bien teóricamente —y en esto coincido con el señor diputado Rabanal— el impuesto a los réditos es directo por naturaleza, y por lo

tanto no resulta inmediatamente trasladable, ello es válido en tanto y en cuanto las formas del mercado no sean monopolíticas u oligopólicas, ya que en tal caso el impuesto termina pesando en el bolsillo del consumidor.

Además, por las mismas razones de poderío económico resulta que los guarismos que ha dado esta tarde el señor diputado Díaz Ortiz sobre la rebaja de la recaudación impositiva en materia de réditos en proporción al total recaudado, y que coinciden con las que diera yo el día martes, ponen de manifiesto el grave fenómeno de la evasión.

**Sr. Rabanal.** — ¿Me permite, señor diputado?

**Sr. Sandler.** — Sí, señor diputado.

**Sr. Rabanal.** — Estoy de acuerdo con el señor diputado en que la sociedad argentina no es una sociedad perfecta, en cuanto existen dentro de ella situaciones de monopolio y de oligopolio. Pero no es menos cierto que, a pesar de ello, el impuesto a los réditos o a las ganancias no es trasladable en forma inmediata, si bien en plazos largos es probable que se produzca su traslación a los precios y que en definitiva lo soportemos todos los integrantes de la población. Pero de ningún modo tiene las consecuencias regresivas de los impuestos indirectos o a los consumos, que son inmediatamente trasladados y soportados por toda la población.

**Sr. Presidente (Odena).** — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Sandler.

**Sr. Sandler.** — Es oportuna la intervención del señor diputado Rabanal porque ratifica lo que acabo de decir, desde el momento que no he hecho referencia al tiempo. Es cierto que los impuestos al consumo son directamente trasladables; pero a medida que el mercado interno argentino resulte más penetrado por los monopolios, más trasladable resultará el impuesto a los réditos.

Me estaba refiriendo al problema de la evasión. La caída de la recaudación en materia de réditos ha puesto de manifiesto la gran evasión que existe por vías legales en virtud de exenciones, deducciones, etcétera, y por otras vías no tan legales, como son las donaciones, a las cuales he de referirme más adelante. Lógicamente, esta evasión ha beneficiado a los poderosos, pues como dice Tulio Rosenbuj, citado ya por el señor diputado Díaz Ortiz, los asalariados no pueden evadir toda vez que se les descuenta en la fuente de trabajo. De aquí que la pretensión de aliviar al máximo posible los ingresos de menor categoría no solo es justiciara y humanitaria sino también realista, pues debemos tener en cuenta esta realidad distorsionante que se presenta en la aplicación del impuesto a los réditos.

Aquella descripción de la realidad que he hecho en cuanto a las dificultades de un mercado penetrado por los monopolios, sumada al problema de la evasión, son los elementos que me han sugerido algunas propuestas de reforma del proyecto elaborado por la comisión.

En el artículo 20 inciso l) se exime del gravamen a las sumas percibidas por los exportadores, correspondientes a reintegros o reembolsos. Temo que se haya confundido exportador con productor, y pienso que con referencia al exportador estamos en presencia de una verdadera ganancia, por lo cual debe oblar el impuesto. Se trata, pues, de una exención que con gusto vería suprimida.

El artículo 87 consagra en su inciso c) una deducción por donaciones al fisco nacional, provincial o municipal, lo que me parece excelente. Pero también ese artículo incluye a instituciones religiosas y a asociaciones culturales y deportivas. En este aspecto, lamentablemente, la experiencia práctica indica que muchas veces el recibo de la donación no traduce el monto efectivamente donado. Es claro que si uno tuviese las pruebas al canto, no sería éste un argumento para modificar un artículo, sino un motivo para una denuncia en el seno del Parlamento. Pero es que estos actos simulados en procura de evadir los impuestos son tan cuidadosamente hechos que solamente tenemos los rumores y los decires, no posibles de ser probados, pero de los que nadie conscientemente duda.

Por eso propongo la supresión de esta deducción prevista en el inciso c) del artículo 87 del proyecto, salvo en la parte que se refiere a las donaciones al fisco, de la cual tenemos pleno control. Si estas instituciones necesitan auxilio económico, este Parlamento suficientemente popular y comprensivo habrá de acordarlo en base a los estudios que efectúe el Poder Ejecutivo. Pero no es posible que prosiga este intercambio oculto y velado de riqueza, que se traduce en el fondo en una evasión que luego pagarán los trabajadores.

Tampoco me satisface el inciso e) del artículo 95 del proyecto, pues si bien es cierto que excluye la posibilidad de deducir los honorarios pagados al extranjero, ello es sólo en la medida en que se excedan los límites que al respecto fije el Poder Ejecutivo en la reglamentación. Yo me sentiría más satisfecho con este artículo si lisa y llanamente no concediera al Poder Ejecutivo la facultad de reglamentar sobre esta materia.

Por supuesto que comparto totalmente lo sostenido aquí en contra del impuesto de emergencia, del 20 por ciento, para el año fiscal 1974. Participo de las razones expuestas por el señor diputado Rabanal, por lo que no he de reproducirlas. Pero agregó que esto distorsiona la escala del artículo 97 del proyecto, especialmente en los primeros tramos. Para el año fiscal 1974, dicha escala no se iniciará con la tasa del 7 por ciento, sino con la del 8,4 por ciento. Es decir que arrancamos más allá de lo previsto por la escala del artículo 97.

No quiero que se genere una ilusión financiera; en materia impositiva —como en tantas

otras— lo permanente es transitorio y lo transitorio resulta permanente. La tabla del artículo 97, con más el recargo del 20 por ciento que dispone el artículo 108 del proyecto, va a ser, a la postre, la tasa que se aplicará durante muchos años. Por eso prefiero que este artículo 108 no sea aprobado por esta Cámara, sin perjuicio de que, si a raíz de la presentación del presupuesto nacional para el próximo ejercicio los cálculos de la recaudación impositiva resultaran insuficientes, proyectemos en esa oportunidad los recursos tributarios que concretamente se requieran. ¡Cómo no vamos a ser comprensivos frente a esa situación! Pero ahora tenemos que sancionar esta ley de impuestos a las ganancias de la manera más limpia y pura, sin mezcolanzas de ninguna especie, por transitoria y excepcional que ésta fuere.

Con respecto a los mínimos no imponibles, he escuchado las cifras que con toda habilidad expusiera el señor miembro informante, tomando la conformación de una familia tipo, presuponiendo que ésta construyera su casa, etcétera. Por mi parte he hecho un cálculo en borrador —que por lo rápido posiblemente esté plagado de errores— también para el caso de una familia tipo cuyo jefe hubiera de obtener una ganancia de diez millones de pesos moneda nacional en todo el año 1974, lo que da aproximadamente unos novecientos mil pesos mensuales, y que no tuviera que construir su casa, porque ya la tiene. Esta persona tendrá que pagar un impuesto que frisa los novecientos mil pesos moneda nacional, teniendo en cuenta las tasas proyectadas y el gravamen de emergencia del 20 por ciento. Esto me parece excesivo, no en función del mínimo necesario para vivir sino en función de que esa persona pertenece inexorablemente al sector medio, y el mínimo no imponible que debemos asegurarle debe comprender un aceptable grado de capitalización. Si queremos hacer esto, tenemos entonces que rebajar las tasas y aumentar los mínimos no imponibles.

Propongo concretamente, con respecto a los mínimos no imponibles que fijemos para los jefes de familia, 30.000 pesos anuales, modificando así el artículo 23; para la esposa, que suele ser más barata de lo que creemos pero no tan barata como dice el proyecto, 12.000 pesos anuales; y para cada hijo, no abriendo juicio sobre si estudia o no, la suma de 6.000 pesos, con lo cual permitiremos un aumento del nivel del mínimo no imponible, no sólo un mínimo de supervivencia sino un cierto grado aceptable de capitalización.

**Sr. Presidente** (Odena). — La Presidencia solicita a los señores diputados que propongan modificaciones durante el curso de sus exposiciones, que hagan llegar sus respectivos textos a la Secretaría, para poder ser consideradas durante la consideración en particular.

**Sr. Sandler.** — Con mucho gusto, señor presidente.

Con respecto a las tasas, aunque estoy de acuerdo con ellas, por lo que acabo de decir, me parece que los tramos iniciales son excesivamente altos.

Si bien este proyecto no goza —desde el punto de vista filosófico— de mi simpatía, reconozco que es muy superior a las leyes que antes existían, que no tuvieron vigencia de sólo una semana sino de varias décadas. Por eso hablaba de las brechas tremendas que se han producido entre los sectores modestos y de bajos ingresos frente a los de mayores recursos. Esta ley no puede ser neutra, tiene que morder directamente a los sectores de mayores ingresos y permitir un respiro —como decía antes— a los tramos menores. Por lo tanto, voy a hacer llegar a la mesa de la Presidencia una modificación con respecto a las tasas determinadas en el artículo 97.

Todo esto puede generar una expectativa que nos obligaría —como dijo el señor diputado Rabanal— a hablar del presupuesto. Diría un poco duramente, que si hubiéramos recibido el presupuesto antes que el paquete de leyes impositivas, ya estaríamos solucionando el problema. Pero no nos vamos a quejar. Sancionemos las leyes impositivas para éste o cualquier otro presupuesto.

Cuando llegue el presupuesto a esta Cámara examinaremos todas las necesidades y procuraremos darle las soluciones más adecuadas. Pero entre tanto y por sobre todo, existe una realidad concreta: la de contemplar las necesidades de los tramos inferiores. En cuanto a los tramos superiores, realmente no acepto que la escala se detenga en los 17 millones de pesos y estimo que la progresividad de los porcentajes debiera continuar según el orden dado hasta más allá de esa cifra. Entonces hay algo que está mal, no solamente en cuanto se refiere a la reducción de las tasas inferiores sino en cuanto al aumento de las tasas superiores.

He anotado dos proposiciones que ha hecho la Unión Cívica Radical por intermedio del señor diputado Rabanal: una es la actualización a los efectos de los balances impositivos, y otra la posibilidad de reinversión, de acuerdo con el artículo 64. Estas dos proposiciones que ya había escuchado antes —ahora con más claridad— me satisfacen. La proposición de modificar el artículo 64 me parece altamente razonable, porque si bien es cierto que si se produce una merma en la recaudación impositiva, ella estaría justificada —en cierta manera— por la reinversión que se autoriza a las empresas.

Habiendo cumplido con el tiempo indicado por la Comisión de Labor Parlamentaria, dejo así concluida mi exposición.

**Sr. Presidente** (Odena). — Tiene la palabra el señor diputado Moral.

**Sr. Moral.** — Señor presidente: hemos señalado —y en esto hemos coincidido con otros expositores— que no podemos considerar cada uno de los proyectos que estamos tratando por separado

sino que debemos estimarlos en su conjunto y vinculados a una realidad económica. Si tomásemos este proyecto de ley de impuesto a las ganancias en una probeta, al vacío, es muy probable que resultaría casi sin observaciones o con algunas que no corresponderían a nuestra realidad, por ejemplo, que no todos sean contribuyentes cuando en la pura ortodoxia tendríamos que ser contribuyentes absolutamente todos. Pero esto contradice una realidad argentina en materia económica, como la contradicen algunos aspectos que no han sido contemplados totalmente en la ley.

Sin perjuicio de señalar luego, tal vez en forma pormenorizada, algunas observaciones sobre el articulado del proyecto de ley quiero referirme a dos aspectos fundamentales que han de incidir extraordinariamente en el desenvolvimiento económico por la aplicación lisa y llana de este proyecto de ley, que quizá podamos corregir.

Uno de ellos no resulta ahora tan pronunciado, ya que el despacho de la comisión ha mejorado sensiblemente el proyecto original en muchos aspectos.

Se ha repetido en este recinto, y por nuestra parte lo anticipamos ayer como observación de fondo, la necesidad que tenemos de incluir en la ley la norma de la actualización patrimonial integral. Aun admitiendo un pequeño proceso inflacionario, esa norma responde siempre a una realidad cierta. Si la escalada de la inflación no es tan pequeña, con muchísima mayor razón debemos preverla dentro de la ley.

Aunque sea como antecedente para el futuro vale la pena señalarlo porque es preciso que de una vez por todas incluyamos disposiciones de este tipo en nuestras leyes impositivas, cuya aplicación no sería tan difícil si se tuvieran en cuenta algunos precedentes que quiero recordar con orgullo de argentino porque es un tema que hace muchísimos años fue enfocado, no a nivel nacional sino a nivel internacional. En conferencias interamericanas de contabilidad la delegación argentina planteó el problema hace muchos años, que no fue considerado porque otros países no presentaban esa característica y, por lo tanto, no le atribuían importancia. Pero cuando, con posterioridad, empezaron a sentir esa influencia, recogieron la iniciativa argentina, y se pusieron a trabajar sobre esa base. Los profesionales argentinos han elaborado normas de actualización que han sido aceptadas a nivel universal, cuya aplicación daría solución, sin dificultad alguna, a la actualización patrimonial, que algunos llaman revalúo en forma indebida.

¿En qué consiste esta actualización patrimonial? No es difícil de comprender. Al establecer los resultados de un proceso económico nosotros estamos ante un aspecto contable y otro impositivo, como lo dijimos ayer. En el orden contable la ganancia surge de la diferencia entre el valor de venta y el valor de compra. Pero

en el aspecto impositivo la cuestión es absolutamente diferente, porque contablemente vamos registrando resultados y valores sin tener en cuenta que ha habido una variación en el valor del patrimonio sin corregir y entonces, para establecer resultados impositivos iguales a los contables, estamos determinando ganancias que no se han producido, con una agravante: cuando hay que otorgar créditos para vender, estamos gravando un ingreso que no se ha producido.

Teóricamente el impuesto tendría que aplicarse sobre el ingreso financiero, y al no hacerse así es lógico que admitamos la actualización de los valores que en definitiva no son más que una corrección de la cantidad de moneda y absolutamente ninguna otra cosa, pues no da mayor capacidad de adquisición, no incrementa el patrimonio sino simplemente actualiza en valores monetarios ese patrimonio.

A través del artículo 51 la comisión ha corregido bien la actualización impositiva de los bienes de cambio. Y digo esto con énfasis porque ha establecido normas que, si bien antes existían, fueron modificadas o suprimidas. Ahora se señalan algunas normas entre las cuales el contribuyente puede optar y se contempla, no con el alcance que debiera tener el problema, la actualización patrimonial, concordantemente con las disposiciones que por el artículo 57 se aplican a otro tipo de bienes.

Señalo también que quedan otros valores que no se actualizan y que, en equidad, tendrían que hacerlo. Lo ideal sería que recogiéramos la inquietud de muchos sectores y establecer una disposición por medio de la cual se establezca la actualización patrimonial integral.

De todos modos señalo que a través de ese artículo 51 se ha avanzado en la materia, lo que evitará algunas controversias llevadas a la justicia por interpretación de la legislación impositiva referente a las normas de valuación de bienes de cambio, siendo conveniente avanzar algo más sobre este aspecto.

Tengo mucha preocupación por la eliminación total y absoluta de las desgravaciones. Cuando hablamos de la filosofía general de los distintos proyectos de impuestos, habíamos anticipado algunas reflexiones con respecto a lo que significan las exenciones y las desgravaciones, de manera que no voy a volver sobre el tema pero sí a señalar que cometemos un error al no admitir algunos tipos de desgravaciones que contemplen aspectos de la realidad nacional.

Es cierto que la desgravación no es más que un subsidio que se da, pero dentro de nuestro proceso productivo —repito lo que dije ayer— eliminar en forma total y absoluta todo tipo de exenciones en las explotaciones agrarias puede llevar a cometer un grave error.

Cuando digo esto no me refiero sólo a la pampa húmeda, al trigo, al maíz o a las vacas, sino que también estoy pensando en la vid en

Mendoza y San Juan, en el azúcar en Tucumán, en el algodón en el Chaco, en la yerba mate en Corrientes y Misiones, en los citrus en Entre Ríos, en la fruticultura, el maní, el olivo y demás actividades comprendidas en este proceso. Proceso que en el país sufre, por distintas razones, una paralización de su producción y que necesitamos intensificar en cualquier forma, no para agredir a un proceso industrial ni mucho menos, sino para complementarlo. De esa intensificación hemos de obtener las materias primas para las industrias que el país debe explotar a fin de no limitarse a vender en el exterior dichas materias primas sino a hacerlas con valor agregado, lo que hará crecer el proceso económico.

La producción agrícola-ganadera en general, con valores topes, con inversiones patrimoniales muy altas, como las de la tierra, la maquinaria utilizada, etcétera, se verá perjudicada. Además, todo eso va a estar gravado con el impuesto al patrimonio, con el ITAEA, que es bastante alto por más que pueda deducirse del impuesto a los réditos, aunque no es tan cierto que se libere de dicho impuesto ni mucho menos; con los gravámenes provinciales, lo que es lógico, porque las provincias tienen que contar también con recursos.

La producción agrícola puede verse desalentada por la supresión de raíz de las desgravaciones. Estimo que puede cometerse un gravísimo error que provoque un nuevo desánimo en los hombres del campo argentino y que produzca una reacción en cadena. No solamente se trata de la explotación del campo argentino; es la industria de la maquinaria agrícola, son una gran cantidad de pequeñas empresas que trabajan en esas localidades cercanas; es el trabajo de mucha gente que vive en esos lugares.

Por eso me preocupa mucho lo que ocurrirá al producirse un corte total, absoluto y drástico de todas las desgravaciones. Admito que lo que existía anteriormente era un exceso total y absoluto, siendo además aprovechado en muchos casos para adquirir bienes desgravables que no se empleaban, lo que tampoco puede ni debe ser aceptado. Pero un régimen de desgravación normal, vigilado y razonable, que vaya eliminándose en un período equis de años, con escalas decrecientes, evitaría quizás muchas dificultades de nuestro proceso económico, y eso es lo que tenemos que salvar.

No voy a entrar en la filosofía de lo que es el impuesto a los réditos, porque no tiene sentido, sobre todo cuando este impuesto, que ahora se denomina a las ganancias, que se implantó en el año 1932 por un período limitado y por razones de emergencia, ya se ha institucionalizado en el país y no sé cuándo podremos modificarlo y cambiarlo.

Pero sí quiero referirme, en algunos casos como observaciones para el futuro y en otros,

como observaciones para el presente, a diversas disposiciones del proyecto de ley en consideración.

En el artículo 8 inciso a), tercer párrafo, se dice que se considerará, salvo prueba en contrario, que existe vinculación económica entre el exportador del país y el importador del exterior, cuando hay una venta al extranjero sin fijar precio fijo.

Se me ocurre —y no estoy en contra del espíritu de la disposición— que hubiera sido más aceptable señalar que la Dirección General Impositiva podrá exigir pruebas de que no existe vinculación económica entre el exportador del país y el importador del exterior. ¿Por qué lo digo? Porque a las industrias radicadas en el país vinculadas a empresas del exterior les importará muy poco esta disposición, ya que pagarán el impuesto y lo compensarán en su país de origen, pues existen disposiciones en tal sentido. Pero me temo que esto afecte a las industrias nacionales que con mucho esfuerzo y sacrificio están empezando a exportar productos argentinos, y que se vean tal vez trabadas en esa posibilidad por una disposición de este tipo. Acaso la aclaración que señalo pueda servir para evitar estos efectos.

El artículo 20 legisla sobre las exenciones, y en el inciso h) se eximen de impuesto los intereses de determinados depósitos, como los efectuados en caja de ahorro, en cuentas especiales de ahorro, a plazo fijo, o con otras modalidades conforme lo determine el Banco Central. Estimo que lo más correcto sería aumentar las tasas de intereses de estos depósitos, si se los quiere alentar, en lugar de establecer desgravaciones impositivas. Según este criterio, el impuesto podrá ser realmente amplio en la base, alcanzando en forma razonable y equitativa a todos los que perciben alguna renta, de cualquier modalidad.

En cuanto a la exención contenida en el inciso j) sobre las ganancias provenientes de la explotación de derechos de autor y los honorarios de los traductores de libros, la aceptamos en virtud del principio de emergencia que tanto se ha invocado en esta Cámara y, además, porque por lo general tales beneficios son pequeños en su monto. Creemos sí, en última instancia, que habría que agregar una regla sobre ajuste por variaciones de los valores monetarios, para que la disposición sea equitativa en relación con otras normas establecidas en la misma ley.

El inciso k) de este artículo exime de gravamen a las ganancias derivadas de títulos y valores emitidos por el Estado nacional o provincial, o por las municipalidades. Consecuentes con lo expresado con relación al inciso h), pensamos que, en lugar de introducir esta exención impositiva, lo que correspondería es que al estructurarse el régimen financiero de esas operaciones de crédito se reconociesen intereses más elevados, con análogo criterio al antes expuesto.

En relación con el inciso l), que exime del impuesto a las sumas correspondientes a reintegros o reembolsos, reiteramos la observación que hicieramos al artículo 8º, considerando conveniente agregar una cláusula optativa a favor del contribuyente. Como es preciso fomentar las exportaciones de nuestras propias industrias, estimamos conveniente disponer que los exportadores podrán optar por acreditar un porcentaje, que podría ser del 33 por ciento, del monto de los reintegros o reembolsos, con imputación a otros impuestos o contribuciones que deban abonar. Esto serviría para ayudar a las empresas argentinas que están trabajando a pérdida —y sabemos que hay una cantidad de ellas—, o que tienen capacidad ociosa, porque contarían con un incentivo para trabajar a pleno. De este modo se permitiría, además, un aumento de las exportaciones y, por lógica consecuencia, un mejoramiento en el índice de ocupación.

El artículo 45, inciso f), incluye entre las ganancias de la segunda categoría a los dividendos de acciones de sociedades constituidas en el país, sin tener en cuenta el origen de los fondos con los cuales se realiza su pago. Me parece que el sistema es injusto porque habría ciertamente que contemplar el origen de los fondos con los cuales se han obtenido esos bienes. Por otro lado, este sistema de imposición al accionista resulta también injusto en lo que atañe a los dividendos de acciones en especie, ya que tales dividendos no representan, en modo alguno, una renta directamente disponible. En tales casos se deberán vender las acciones recibidas en pago de dividendos, cuando ellas tengan cotización en bolsa, para lograr los fondos destinados a pagar el tributo, y si las acciones no se cotizasen en bolsa, se deberán afectar otros bienes o ingresos para hacer frente al impuesto que grava a los dividendos percibidos en acciones.

Incluso habría que haber tenido en cuenta el caso de algunos contribuyentes, en relación de dependencia, que haciendo uso de las franquicias de la ley 19.061 optaron con sus reservas por el criterio de adquirir acciones con dividendos superiores a 500 pesos, y que van a tener que contribuir también al ser alcanzados por este tributo.

En el artículo 48, en el inciso referido a la enajenación de inmuebles, cuando hubieran transcurrido menos de dos años desde la fecha de su adquisición, parecería que se consagra un criterio que tiene como mira considerar estas enajenaciones como una actividad puramente comercial. Esto traerá como consecuencia que el contribuyente no pueda utilizar los índices de actualización y que no pueda imputar la ganancia obtenida mediante la enajenación de bienes afectados a la explotación como bienes de uso al costo del nuevo bien de reemplazo. Esta situación debe tenerse en cuenta.

En el artículo 64, referido al gravamen de las sociedades de capital, nos preocupa la posibili-



dad de que el sistema aplicado a través de esta ley conspire, por un lado, contra la capitalización de las empresas, porque se establecen tasas elevadas cuando no se distribuyen dividendos, o que, por el otro lado, induzca a la distribución de dividendos como una forma de disminuir la imposición sin que haya reinversión.

Este tratamiento impositivo puede producir un efecto contrario al buscado porque, si bien es cierto que puede haber un ocultamiento de dividendos en algunas empresas, lo normal y corriente dentro de nuestro proceso económico financiero, que es el que nos interesa al analizar estas leyes, es que muy pocas empresas y casi ninguna de las pequeñas y medianas, están financieramente en condiciones de distribuir dividendos porque dedican sus utilidades a una reinversión productiva. Con esta disposición legal vamos a correr el riesgo de introducir el desánimo total, con la consiguiente descapitalización y disminución de la producción.

Tal vez el efecto buscado, de corregir algún mal en centros muy grandes de población, donde se concentran algunas actividades empresarias y financieras, conspire contra el desenvolvimiento de la pequeña y mediana industria, que con grandes sacrificios está laborando silenciosamente en el interior de nuestro país para el porvenir de la Nación.

En todo esto es necesario aclarar, señor presidente, que no nos interesa objetivamente el contribuyente ni tampoco el Estado, uno como pagador del impuesto y el otro como recaudador. Nos interesa, sí, el estado de la economía argentina y la necesidad de su reactivación en el plazo más breve posible, con la mayor celeridad posible y con el esfuerzo de todos para concretar lo que todos los días decimos y clamamos dentro y fuera de este recinto.

El artículo 84 es una copia casi textual del artículo 14 de la ley del impuesto a las ganancias eventuales. Sostengo, tal como lo hemos hecho en otras ocasiones, que se incurre en un error al delegar en el Poder Ejecutivo atribuciones que son propias del Poder Legislativo. Y digo esto porque se dispone que el Poder Ejecutivo determinará el monto límite de la nueva adquisición para poder afectar la utilidad obtenida al nuevo bien.

En el artículo 97 hubiéramos deseado tramos más largos en las escalas y, tal vez, un incremento en las escalas superiores.

Además hacemos otra observación. La tasa a aplicarse a las personas físicas resulta inferior a la tasa actual. Así, una renta que oscila alrededor de los 250.000 pesos, entra allí en un punto de indiferencia y empieza a crecer. Si se comparan las tasas que están actualmente en vigencia con las que van a empezar a regir, expresadas éstas en números, resultan muy ventajosas y nos satisfacen. Pero si tenemos en cuenta el incremento del 20 por ciento en virtud del artículo 108, la incorporación de los valores

mobiliarios al patrimonio y la gravación de este, es muy posible que quede absolutamente neutralizada esa diferencia en razón del mayor monto imponible.

El artículo 108, como ya se ha dicho aquí, desvirtúa en definitiva las escalas progresivas e incide con mucha intensidad, acumulando los distintos impuestos que tendrán que oblar los contribuyentes en los próximos años, aunque se considere esto como un sacrificio necesario para la recuperación del país.

Tampoco vemos por qué —y esto viene de larga data— la ganancia neta no imponible en la carga de familia es diferente para los distintos habitantes del país. No vemos por qué se considera que debe deducirse más para unos que para otros. Inclusive se hacen distinciones dentro de una misma categoría.

Esto está vinculado, por supuesto, con algo que dije al principio en cuanto a que en nuestro régimen no hemos podido llegar todavía a establecer que todos debemos contribuir. Y es lógico que todavía siga siendo así por la situación socioeconómica del país. Pero me parece que en algunos casos se cometen tremendas injusticias. Por ejemplo, por el artículo 92, apartado 2º, el que realiza trabajos en forma personal en una empresa tiene una determinada deducción y no la tienen los que no realizan actividad personal. Se podrá decir que es porque estos últimos viven en otra forma y tienen otros ingresos. Yo no sé si siempre es así: personalmente conozco casos en que sucede así, pero también conozco otros en que esto no sucede. Hay personas con incapacidad física que no pueden hacer trabajos personales y cuyos únicos recursos provienen de esa fuente de ingresos que es la empresa. Entonces, por castigar a los ociosos también estamos castigando a los que sin serlo se encuentran en una situación de inferioridad para realizar determinadas funciones. Y esto con el agregado de que se va a seguir haciendo como en otros casos: esa persona va a aparecer trabajando personalmente sin hacerlo en realidad, con lo que se comete no diré una inmoralidad pero sí una picardía que no tendría que suceder.

En cuanto a los montos, tendrían que ser más elevados. Dijo bien el señor diputado Sandler —aunque yo no lo comparto— que las esposas son más baratas de lo que uno piensa pero que aquí se las considera todavía más baratas; y con los hijos ocurre lo mismo. Es decir que el proyecto es un poco egoísta con respecto a esas deducciones para las cargas de familia. Si bien se contempla en el inciso c) la deducción de los gastos médicos y odontológicos, lo es también en muy pequeña escala y no se contempla, por lo menos no lo he leído en el proyecto del que hecho una lectura minuciosa, la deducción de los gastos de sepelio, que en estos momentos también son muy gravosos.

Es cierto que casi todo el mundo en estos momentos está mutualizado y, entonces, la deducción de la cuota mutual parece cubrir esos aspectos. Pero hay una serie de casos que no están cubiertos; cuando el proceso es leve la incidencia no es tan grave; pero cuando se tiene la desgracia de un problema de otra naturaleza entonces el gasto es bastante elevado y la ley no contempla la posibilidad de su deducción. También en el recinto se ha señalado la diferencia que puede existir con respecto al estudio.

**Sr. Presidente** (Odena). — La Presidencia señala al señor diputado que ha vencido el término de que dispone para su exposición y lo invita a que en algunos minutos más redondee su pensamiento.

**Sr. Moral**. — Soy respetuoso del tiempo fijado y no quiero abusar en ese sentido, por lo que dejo así señaladas las observaciones que el proyecto merece en general, así como las que se refieren en particular a algunos artículos.

Aliento la esperanza de que si nuestras preocupaciones no se recogen en este momento, en otra oportunidad serán tomadas en cuenta a fin de estructurar debidamente la ley del impuesto a las ganancias.

**Sr. Presidente** (Odena). — Tiene la palabra el señor diputado Arana.

**Sr. Arana**. — Señor presidente: no vamos a repetir aquí las discusiones que sobre este proyecto se han realizado en forma exhaustiva y largamente en la Comisión de Presupuesto.

El bloque de la Alianza Popular Revolucionaria, y el partido Intransigente que lo integra, ha fijado ya su posición favorable a la sanción de estas leyes. La ley del impuesto a las ganancias junto con las de los gravámenes y patrimonios y al valor agregado componen fundamentalmente este sistema de reformas tributarias que el Poder Ejecutivo ha remitido para su consideración por esta Cámara.

Esta ley tiene como elemento novedoso —porque en definitiva se fundamenta en dos impuestos de larga data en el país, los impuestos a los réditos y a las ganancias eventuales— el de eliminar el concepto de rédito, que objetivamente tiene el sentido de la habitualidad, reemplazándolo por el de ganancia, que constituye un concepto genérico comprensivo de todos los ingresos con los cuales se acrecienta el patrimonio individual.

Nosotros estamos de acuerdo en general y también en particular porque las observaciones se han vertido oportunamente durante la discusión efectuada en la Comisión de Presupuesto en la cual participaron los diputados de este bloque y sus asesores así como los de los demás bloques representados en esta Cámara.

Por estas consideraciones, dejamos establecida nuestra decisión de apoyar en general y en particular el proyecto remitido por el Poder Ejecutivo.

**Sr. Presidente** (Odena). — Tiene la palabra el señor diputado Mira.

**Sr. Mira**. — Señor presidente: el proyecto de ley que ha enviado el Poder Ejecutivo tiene nuestro apoyo en general porque, como ya lo han señalado otros diputados, avanza en lo que se refiere al sistema impositivo anterior y, además, está dentro de un estilo moderno de imposición.

Entendemos que quien más tiene más debe aportar al Estado en concepto de contribución impositiva. Este es un principio que nuestro partido, el Partido Comunista, lo ha reafirmado en su último congreso realizado en la ciudad de Buenos Aires y que además fue planteado por el ex presidente Cámpora al dar a conocer las pautas programáticas al señalar que «la política fiscal ha acompañado coherentemente la entrega del patrimonio nacional y la pauperización de los sectores populares durante los últimos diecisiete años». Y agregaba después de señalar que corresponde una revisión total del sistema impositivo: «Esta profunda revisión deberá realizarse teniendo en cuenta la imprescindible necesidad de simplificar substancialmente la determinación y recaudación de los impuestos, de otorgar a los mismos no sólo en la ley, sino en los hechos, el necesario grado de justicia, haciendo incidir las cargas públicas de acuerdo a las reales posibilidades de los contribuyentes».

Por su parte, la plataforma electoral de la Alianza Popular Revolucionaria decía en su artículo 16: «La política fiscal será concebida como instrumento de reajuste estructural y de redistribución del ingreso nacional». A pesar de la disidencia que con este principio ha planteado en este recinto un diputado conservador, esta regla de que quien más tiene más debe pagar está tan profundamente arraigada y es tan justa que un matutino como «La Nación», al hacer algunas críticas a los proyectos que estamos discutiendo, tiene que admitir en su editorial de hoy lo siguiente: «Propósito esencial de la reforma, según las reiteradas manifestaciones oficiales, es la redistribución del ingreso en beneficio de las clases económicamente menos favorecidas. El objetivo es difícilmente cuestionable». Es decir, se reconoce que este principio es el que debe prevalecer en materia impositiva.

Partiendo de ese principio justo, creemos que en el proyecto que consideramos hay un avance importante en el sentido indicado. Sin embargo —a pesar del arduo trabajo que ha realizado la comisión y de la contribución que han hecho los representantes del Poder Ejecutivo en las reuniones realizadas, como consecuencia de lo cual el proyecto ha sido mejorado en varios aspectos—, hay algunas cuestiones, y en esto disiento con otros diputados preopinantes, en las que el proyecto del Poder Ejecutivo se ha visto empeorado.

Así, en el artículo 97, que fija la escala según la cual deberá ser abonado el impuesto por las

personas de existencia visible y sucesiones indivisas —escala que es positiva, dado su carácter progresivo—, la comisión ha introducido una enmienda justamente en los niveles más altos. En efecto, hasta el sexto escalón no hay ninguna modificación; pero a partir de allí aparecen modificaciones, no para gravar más a las grandes ganancias sino para reducir la tasa a aplicarles.

¿Por qué planteo esta cuestión, señor presidente? Porque cuando discutamos el impuesto al valor agregado, impuesto que grava directamente al consumo, vamos a plantear una reducción de la tasa, y entonces, para contrabalancear el menor ingreso que habría por tal motivo, propiciamos aumentar el impuesto que ahora consideramos en lo que se refiere a las grandes ganancias. De ahí que hayamos presentado una propuesta de modificación del artículo 97 a fin de que se mantenga tal como aparece en el proyecto del Poder Ejecutivo.

El artículo 98, según ha sido propuesto por la comisión, dispone que respecto de las sociedades o empresas constituidas en el extranjero su contribución será del 45 por ciento. Nosotros proponemos mantener la tasa del 47 por ciento proyectada originariamente por el Poder Ejecutivo. Igualmente proponemos que se mantenga la tasa del 32 por ciento aplicable a los dividendos pagados a beneficiarios del exterior, tal como figuraba en el proyecto del Poder Ejecutivo, en lugar de la tasa del 29,5 por ciento que se fija en el dictamen. En todo esto nos basamos en el principio de que quien más tiene más debe pagar.

Con respecto a las facultades que los artículos 102 y 106 del proyecto otorgan al Poder Ejecutivo para exenciones de este gravamen, entendemos que para todos los casos pero muy especialmente el de personas o empresas que residen en el extranjero, no corresponden. Imponer impuestos y eximir de ellos es una potestad exclusiva de este Parlamento. Hay que tener en cuenta que la legislación que habremos de sancionar no lo es sólo con vistas al actual Poder Ejecutivo —que prevemos habrá de determinar las excepciones con un criterio de estricta justicia y para el desarrollo de áreas básicas—, por lo que la posibilidad de eximir deber ser otorgada con acuerdo del Poder Legislativo. Nosotros pensamos que todas las exenciones ya otorgadas deben ser revisadas por el Parlamento argentino, especialmente las dictadas durante los años del gobierno militar, en que se avanzó enormemente no en favor de los sectores populares ni de las pequeñas y medianas empresas nacionales sino, precisamente, en beneficio de las grandes empresas multinacionales.

En cuanto al artículo 108, el proyecto original del Poder Ejecutivo fijaba un recargo del 30 por ciento para el año fiscal 1974, el que fuera reducido a un 20 por ciento en el despacho de la comisión. Porque partimos del supuesto de que quien más tiene, más debe pagar, nosotros entendemos que habría que mantener el recargo

anteriormente fijado por el Poder Ejecutivo. En esta materia, un señor diputado que planteó lisa y llanamente la anulación de este recargo, sostuvo que éste es un impuesto que lo pagarán todos por igual. Entiendo que no es así, señor presidente, sino que se trata de un impuesto progresivo que actúa como un plus del impuesto a las ganancias. Una persona que tuviera que pagar un impuesto a las ganancias de 800 pesos, tributaría en concepto de gravamen de emergencia la cantidad de 240 pesos; en cambio, quien tuviera que abonar 600.000 pesos en concepto de impuesto a las ganancias, tendría que pagar 180.000 pesos en concepto de gravamen de emergencia. Como se ve, se trata de una diferencia que afectaría a las grandes ganancias, y no a las pequeñas y medianas. De manera que el mantenimiento del recargo original redundaría en beneficio de las arcas fiscales, para posibilitar así las obras que ayer mismo se expresara en este recinto tiene planteadas el actual gobierno, propendiendo eficazmente a una política de expansión nacional.

Estas son nuestras disidencias con respecto al proyecto en consideración. Creemos que con la ley proyectada se ha avanzado en materia legislativa, y de allí que en general estemos de acuerdo con su estructuración. Ya hemos hecho llegar a la mesa de la Presidencia las propuestas de modificaciones a que hemos aludido, a los efectos de ser tenidas en cuenta en la pertinente oportunidad de la discusión en particular.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1º de la Honorable Cámara, doctor Salvador F. Busacca.

**Sr. Presidente (Busacca).** — Tiene la palabra el señor diputado Díaz Ortiz.

**Sr. Díaz Ortiz.** — Señor presidente: en primer término he de contestar algunas de las objeciones formuladas precedentemente. Lo hago con un espíritu realmente de complacencia, pues tales objeciones no agreden a la ley en su sustancia, dado que las planteadas son cuestiones operativas del proyecto mismo, que han respondido a cuestiones concretas que se procuraron plasmar en este régimen que estamos analizando.

Una de las objeciones, enunciada en primer término por el señor diputado Rabanal y que fuera recogida por otros oradores, se refiere a la revaluación de activos y pasivos. El tema es demasiado vasto y complicado como para afrontarlo en esta instancia. Consideramos —y así de alguna manera comprometemos la opinión del bloque mayoritario— que este tema deberá ser objeto de una opinión definitiva por parte de este Parlamento en el próximo período de sesiones ordinarias; probablemente después del meduloso estudio que el tema merece, se dé solución definitiva al problema de la revaluación de activos y pasivos, tanto en sus aspectos inflacionarios como deflacionarios.

También se ha hecho una crítica incidental a la inclusión de los dividendos de las acciones en las declaraciones anuales individuales. Con relación a este tema la mayoría de la comisión y también el Poder Ejecutivo estiman que es una herramienta de política fiscal y es coherente con el criterio de sancionar una ley de ganancias neutra. Como eficaz herramienta de política fiscal va a ser motivo de consideración en los distintos rubros, sectores o aspectos de la actividad económica que se quiera promover en el futuro. Por lo tanto, deberá ser también motivo de una ley especial que trate exhaustivamente el tema.

También se ha hecho una crítica genérica a las tasas que fija el proyecto de ley. Con respecto a este punto, debe tenerse en cuenta que la Comisión de Presupuesto y Hacienda ha aumentado los mínimos no imponibles y demás adicionales, con lo cual se ha desplazado la curva de las tasas progresivas en forma substancial.

Por otra parte, la rebaja de la tasa del artículo 108, del 30 —como venía en el proyecto original— al 20 por ciento implica un substancial y sensible mejora.

Con relación a la tasa del 20 por ciento, que da el artículo 108, de la cual se ha dicho que es una tasa no permanente, y que en adelante tendría el carácter de permanente, con lo cual se desvirtúa el sentido de la política deflacionaria de las tasas que en general este proyecto contempla, debo poner en evidencia lo que dijera anteriormente: la tasa fue reducida del 30 al 20 por ciento.

Esta medida circunstancial, fundamentada en una causal concreta, como es un mayor sacrificio del conjunto de la población para salir de una situación bien conocida, que aspiramos a que, a través de estos y otros esfuerzos, pueda ser superada, no admite, en consecuencia, la imputación fácil de que esto que es accidental se va a convertir en permanente.

Quiero señalar la curiosa coincidencia que esta ley ha determinado en su estructura y en sus aspectos substanciales en la casi generalidad de los bloques de esta Cámara. En ese sentido, podemos decir que ella indiscutiblemente viene a llenar una serie de expectativas y que, dentro de un marco de mayor profundización, dentro de una concepción revolucionaria a la cual el pueblo aspira, dentro de la relatividad de todas estas cuestiones, es lo mejor que se ha podido lograr. De ahí, la aceptación que este proyecto en sus términos generales ha merecido del conjunto de bloques de esta Cámara.

**Sr. Presidente (Busacca).** — Se va a votar en general.

—Resulta afirmativa.

**Sr. Presidente (Busacca).** — En consideración en particular el artículo 19.

Se va a votar.

—Resulta afirmativa.

—Sin observaciones, se votan y aprueban los artículos 2º a 13.

**Sr. Presidente (Busacca).** — En consideración el artículo 14.

Tiene la palabra el señor diputado Rabanal.

**Sr. Rabanal.** — En el artículo 14, cuarto párrafo, se hace referencia al «centro de imputación de sus decisiones». En el proyecto remitido por el Poder Ejecutivo se decía lo mismo. No sé si puede haber otra palabra que se adecue con mayor precisión a este concepto, que es el del centro de donde emanan las decisiones.

**Sr. Presidente (Busacca).** — Tiene la palabra el señor diputado Díaz Ortiz.

**Sr. Díaz Ortiz.** — El empleo de esta palabra responde a una terminología que se origina en el fallo del caso Parke Davis. Fue usado por la Corte Suprema y, por la misma razón, se adoptó.

Para mantener una uniformidad en la interpretación estimo que debería dejarse tal cual está, por más que hubiere otro término que fuere más adecuado.

**Sr. Rabanal.** — Quiero dejar, por lo menos, como interpretación auténtica de esta Cámara que tiene el sentido de centro de toma de decisiones.

**Sr. Díaz Ortiz.** — Efectivamente, es como dice el señor diputado Rabanal. El centro de imputación de decisiones de una empresa o una sociedad cualquiera es el lugar donde se toman las decisiones.

**Sr. Presidente (Busacca).** — Está suficientemente aclarado.

Se va a votar el artículo 14.

—Resulta afirmativa.

—Sin observaciones, se votan y aprueban los artículos 15 a 19.

**Sr. Presidente (Busacca).** — En consideración el artículo 20.

Por Secretaría se dará lectura a una observación del señor diputado Sandler.

**Sr. Secretario (Rocamora).** — El señor diputado Sandler propone eliminar el inciso 1) del artículo 20.

**Sr. Presidente (Busacca).** — ¿La comisión acepta la supresión?

**Sr. Díaz Ortiz.** — La comisión no acepta, señor presidente.

**Sr. Presidente (Busacca).** — Se va a votar el artículo 20.

—Resulta afirmativa.

—Sin observaciones, se votan y aprueban los artículos 21 y 22.

**Sr. Presidente (Busacca).** — En consideración el artículo 23.

Por Secretaría se dará lectura a una observación formulada por el señor diputado Sandler.

**Sr. Secretario (Rocamora).** — El señor diputado Sandler formula la siguiente observación: en el inciso a), donde dice \$ 20 400, debe decir: \$ 30.000; en el inciso b), apartado 1º, donde dice \$ 6.000, debe decir: \$ 12.000; y en el apartado 2º, donde dice \$ 4.000, debe decir: \$ 6.000.

**Sr. Presidente (Busacca).** — ¿La comisión acepta la modificación propuesta?

**Sr. Díaz Ortiz.** — La comisión no acepta, señor presidente.

**Sr. Presidente (Busacca).** — Se va a votar el artículo 23.

—Resulta afirmativa.

—Sin observaciones, se votan y aprueban los artículos 24 a 30.

**Sr. Presidente (Busacca).** — En consideración el artículo 31.

Tiene la palabra el señor diputado Rabanal.

**Sr. Rabanal.** — Este artículo hablaba de las ganancias de hijos menores de edad, según el proyecto remitido por el Poder Ejecutivo. En la comisión se acordó que se diría: «ganancias de los menores de edad», tal como figura en su texto. Pero en el título se dice: «Ganancias de hijos menores de edad». Por lo tanto, habría que suprimir la palabra «hijos».

**Sr. Presidente (Busacca).** — ¿Acepta la comisión la supresión propuesta en el título del artículo?

**Sr. Díaz Ortiz.** — Sí, señor presidente.

**Sr. Presidente (Busacca).** — Se va a votar el artículo 31, con la supresión del término «hijos», que figura en su título.

—Resulta afirmativa.

—Sin observaciones, se votan y aprueban los artículos 32 a 40.

**Sr. Presidente (Busacca).** — En consideración el artículo 41.

Tiene la palabra el señor diputado Rabanal.

**Sr. Rabanal.** — En virtud del inciso d) de este artículo deben ser declarados como ganancias por el propietario de los bienes respectivos «la contribución directa o territorial y otros gravámenes que el inquilino o arrendatario haya tomado a su cargo». En realidad, me parece que deben ser exceptuados aquellos gravámenes que sean consecuencia de la propia actividad del inquilino o arrendatario. Hay ocupantes de inmuebles que están gravados con tasas especiales, las que son exclusivas o inherentes a su propia actividad; es el caso de las fábricas de soda, que pagan una tasa especial a Obras Sanitarias de la Nación, precisamente porque realizan una actividad que significa un elevado consumo de agua.

Por estos motivos, propongo que se agregue al inciso d) la frase siguiente: «...salvo los gravámenes que correspondan a la actividad que desarrolla el locatario».

**Sr. Presidente (Busacca).** — Acepta la comisión el agregado propuesto?

**Sr. Díaz Ortiz.** — La comisión no acepta.

**Sr. Presidente (Busacca).** — Se va a votar el artículo 41.

—Resulta afirmativa.

—Sin observaciones, se votan y aprueban los artículos 42 a 44.

**Sr. Presidente (Busacca).** — En consideración el artículo 45.

Tiene la palabra el señor diputado Díaz Ortiz.

**Sr. Díaz Ortiz.** — En el artículo 45, el inciso e) incluye una disposición cuyo texto reza: «Las utilidades que bajo cualquier denominación (retorno, interés accionario, etcétera) distribuyan entre sus socios las cooperativas, excepto las de consumo, sin tener en cuenta el origen de los fondos con los cuales se realiza su pago. Cuando se trate de las cooperativas denominadas de trabajo, será de aplicación lo dispuesto en el inciso d) del artículo 78».

El artículo 45 contiene la definición de lo que se entiende por ganancias de la segunda categoría; pero, con relación a este particular tema de las sociedades cooperativas, la mayoría de la comisión propone la substitución del inciso e) por un texto que diga: «El interés accionario que distribuyan las cooperativas, excepto las de consumo». El fundamento de esta modificación es el que paso a exponer. El inciso e), cuyo reemplazo se propone, otorga el carácter de ganancias de la segunda categoría al retorno que las cooperativas distribuyen a sus socios.

Esta categorización resulta inadecuada a poco que analicemos los fundamentos del retorno o de la utilidad que las cooperativas hacen a sus asociados. En las cooperativas de venta —por ejemplo— el retorno está dado por los excedentes entre el precio de venta por parte de la cooperativa y el precio de adquisición abonado, menos los gastos de la propia entidad. En consecuencia, el retorno es el reconocimiento al asociado del mayor precio de venta. Aquí no se trata, indudablemente, de una ganancia que se pueda definir como de segunda categoría, sino que tiene otra naturaleza. Igual razonamiento es aplicable a las cooperativas de compra, y también a las de trabajo.

**Sr. Presidente (Busacca).** — Se va a votar el artículo 45, con la modificación del inciso e) propuesta por el señor miembro informante de la mayoría de la comisión.

—Resulta afirmativa.

—Sin observaciones, se votan y aprueban los artículos 46 y 47.

**Sr. Presidente (Busacca).** — En consideración el artículo 48.

Tiene la palabra el señor diputado Rabanal.

**Sr. Rabanal.** — En la discusión en general señalé que el inciso c) habla de «auxiliares de co-

mercio», y creo que habría que hacer una excepción en cuanto a los corredores, que están contemplados en la cuarta categoría, y están dentro de la enumeración que realiza el artículo 87 del Código de Comercio. Ocurre que están incluidos en el inciso f) del artículo 78. Creo que aquí habría que decir: con excepción de los corredores, para establecer perfectamente cuál es la diferencia entre lo dispuesto en el artículo 78 y lo que se indica en el inciso c) del artículo 48.

**Sr. Presidente (Busacca).** — Señor diputado: ¿qué propone concretamente?

**Sr. Rabanal.** — Que se agregue, señor presidente, al final del inciso c) del artículo 48 lo siguiente: «excepto los corredores».

**Sr. Presidente (Busacca).** — ¿Acepta la comisión?

**Sr. Díaz Ortiz.** — La comisión no acepta, señor presidente, porque la naturaleza jurídica de la actividad del corredor es igual a la de los comisionistas, rematadores, consignatarios, etcétera.

**Sr. Rabanal.** — Como consecuencia de lo dicho por el señor diputado Díaz Ortiz habría que suprimirlo del inciso f) del artículo 78, que incluye esa actividad.

**Sr. Presidente (Busacca).** — ¿Acepta la comisión?

**Sr. Díaz Ortiz.** — No acepta, señor presidente.

**Sr. Presidente (Busacca).** — Se va a votar el artículo 48.

—Resulta afirmativa.

—Sin observaciones, se votan y aprueban los artículos 49 y 50.

**Sr. Presidente (Busacca).** — En consideración el artículo 51.

Tiene la palabra el señor diputado Rabanal.

**Sr. Rabanal.** — Señor presidente: en relación con este artículo, habíamos conversado sobre la posibilidad de modificarlo, porque en su texto original se hacía una referencia a la actividad forestal, que fue trasladada al artículo 111.

Consideramos que habría que realizar una inclusión en el texto de este artículo, y por ello solicito a la Presidencia pasar a un breve cuarto intermedio en las bancas para facilitar la consulta con los representantes del bloque de la mayoría.

**Sr. Presidente (Busacca).** — Con mucho gusto, señor diputado.

La Presidencia invita a los señores diputados a realizar un breve cuarto intermedio en las bancas.

—Luego de unos instantes:

**Sr. Presidente (Busacca).** — Continúa la sesión.

Tiene la palabra el señor diputado Rabanal.

**Sr. Rabanal.** — Señor presidente: como en el artículo 51 se fijan las pautas para la realización del balance impositivo, considero que está más

de acuerdo con la armonía de la ley que la primera parte del artículo 111, en cuanto modifica al artículo 60 de la ley 13.273, se incluya a continuación de la última parte del artículo 51. Es decir que al final de la actual redacción del artículo 51 se agregue un párrafo que diga: «Para practicar el balance impositivo del impuesto a las ganancias se podrá tomar como precio de inventario de las plantaciones el que resulte de adicionar anualmente al costo de los mismos el aumento de valor de la madera que para cada especie fije o acepte la Dirección General Impositiva. El mayor valor así obtenido, sin perjuicio de resultar computable como costo en la oportunidad de la venta de la madera, será deducible en la determinación del impuesto del año en que se produzca dicho aumento de valor, en la forma que determina la reglamentación».

**Sr. Gualco.** — El bloque justicialista apoya la modificación propuesta por el señor diputado Rabanal.

**Sr. Díaz Ortiz.** — La comisión acepta.

**Sr. Presidente (Busacca).** — Se va a votar el artículo 51, con la redacción aceptada por la comisión.

—Resulta afirmativa.

—Sin observaciones, se votan y aprueban los artículos 52 a 77.

**Sr. Presidente (Busacca).** — En consideración el artículo 78.

Tiene la palabra el señor diputado Díaz Ortiz.

**Sr. Díaz Ortiz.** — Constituyen ganancias de cuarta categoría las provenientes —dice el inciso c) del artículo 78— «de las jubilaciones, pensiones, retiros o subsidios de cualquier especie en cuanto tengan su origen en el trabajo personal». Al final de este inciso proponemos la inclusión de la siguiente frase: «y de los consejeros de las sociedades cooperativas».

El fundamento de este agregado, que propone la mayoría de la comisión, es que los consejeros de las sociedades cooperativas cumplen funciones similares a los directores de sociedades anónimas, y por lo tanto sus remuneraciones, por estricta justicia, deben ser tratadas impositivamente en la misma forma que los honorarios de los citados directores.

**Sr. Presidente (Busacca).** — Se va a votar el artículo 78 con el agregado propuesto por la comisión al inciso c).

—Resulta afirmativa.

—Sin observaciones, se votan y aprueban los artículos 79 a 83.

**Sr. Presidente (Busacca).** — En consideración el artículo 84.

Tiene la palabra el señor diputado Rabanal.

**Sr. Rabanal.** — Señor presidente: en la discusión realizada en la comisión, si mal no recuerdo, quedó convenido que se iba a decir en

este artículo «una o más viviendas», porque se tuvo en cuenta la posibilidad de que para adquirir la vivienda destinada a casa-habitación el contribuyente tuviera que enajenar más de una vivienda en razón del mayor precio que tendrá que pagar. Así fue aceptado, en su momento, por los representantes del Poder Ejecutivo y también por la Comisión de Presupuesto. Por eso hago indicación de que se modifique el primer párrafo de este artículo y quede redactado así: «En el supuesto de venta de una o más viviendas con el objeto...», etcétera.

**Sr. Presidente (Busacca).** — ¿Acepta la comisión?

**Sr. Díaz Ortiz.** — Haciendo fe en las palabras del diputado Rabanal, y en mi memoria es cierto lo que dice, la comisión acepta.

**Sr. Presidente (Busacca).** — ¿Cómo quedaría redactado el artículo, señor diputado Rabanal?

**Sr. Rabanal.** — En la primera parte se modificaría en este sentido: «En el supuesto de venta de una o más viviendas...», es decir, se pondría «una o más», y además se incluiría «viviendas», es decir, en plural. El resto del artículo quedaría como está.

**Sr. Presidente (Busacca).** — Tiene la palabra el señor diputado Sandler.

**Sr. Sandler.** — Hemos conculcado con algunos señores diputados en cuanto a que en el mismo artículo 84, en la mitad de su primer párrafo, se dice «siempre que la valuación fiscal del nuevo inmueble no supere el monto que fije el Poder Ejecutivo».

Como ésta es una ley de carácter permanente, tal disposición no ofrece suficiente elasticidad; por eso se propone que se diga: «...que no supere el monto de ciento cincuenta mil pesos (\$ 150.000)».

Si se aceptara este temperamento también habría que modificar el artículo 96, incorporándolo al artículo 84 modificado.

**Sr. Presidente (Busacca).** — ¿Acepta la comisión la propuesta del señor diputado Sandler?

**Sr. Díaz Ortiz.** — Solicito que se pase a un breve cuarto intermedio en las bancas.

**Sr. Presidente (Busacca).** — Invito a la Honorable Cámara a pasar a un breve cuarto intermedio.

—Luego de unos instantes:

**Sr. Presidente (Busacca).** — Continúa la sesión.

Tiene la palabra el señor diputado Díaz Ortiz.

**Sr. Díaz Ortiz.** — La comisión acepta la propuesta del señor diputado Sandler.

**Sr. Presidente (Busacca).** — Tiene la palabra el señor diputado García.

**Sr. García.** — Deseo pedir una aclaración al señor diputado Rabanal en el sentido de que cuando se vende más de una vivienda con el objeto de construir o adquirir otra el contribuyente no sé si merece un tratamiento especial

porque es propietario de más de una vivienda. Yo entiendo que en este caso la protección tendría que limitarse única y exclusivamente al propietario de una sola y única vivienda.

Formulo simplemente una pregunta para satisfacer mi curiosidad.

**Sr. Presidente (Busacca).** — Tiene la palabra el señor diputado Rabanal.

**Sr. Rabanal.** — Creo que está totalmente justificada la inclusión de «una o más viviendas» como consecuencia de que el agregado tiene por objeto el mejoramiento social del individuo y, además, porque se piensa en la posibilidad de un aumento de su núcleo familiar; en el supuesto caso de que como consecuencia del nacimiento de hijos tuviera necesidad de ampliar la capacidad habitable de la vivienda, es lógico que se desprenda de ella y adquiera otra que por su volumen mayor implique un precio superior.

Además voy a proponer que en lugar de «viviendas», diga «inmuebles», para contemplar también la posibilidad de que quien se desprende de un terreno que no tiene la posibilidad de ser una vivienda en el concepto técnico, aunque si es un inmueble, pueda también llegar a estar comprendido.

Vale decir que el artículo quedaría: «En el supuesto de venta de uno o más inmuebles con el objeto de construir o adquirir...».

**Sr. García.** — En el supuesto de que se diga «uno o más inmuebles con el objeto de construir o adquirir otra», también tendríamos que modificar el vocablo «otra», y poner «adquirir una vivienda».

**Sr. Rabanal.** — De acuerdo, señor diputado.

**Sr. Díaz Ortiz.** — La comisión acepta.

**Sr. Presidente (Busacca).** — ¿Cómo quedaría redactado el artículo, señor diputado?

**Sr. Díaz Ortiz.** — Ruego al señor diputado Rabanal que dé lectura a la redacción definitiva.

**Sr. Rabanal.** — Su párrafo primero quedaría así: «En el supuesto de venta de uno o más inmuebles con el objeto de construir o adquirir una vivienda destinada a casa-habitación propia del contribuyente, que no supere el monto de 150.000 pesos, podrá optarse, siempre que la valuación fiscal del nuevo inmueble no supere el monto que fije el Poder Ejecutivo...».

**Sr. Insúa.** — Si me permite, señor presidente.

No parece conveniente establecer una suma fija, porque podría ocurrir que esa suma llegara a ser insuficiente.

**Sr. Presidente (Busacca).** — ¿El señor diputado objeta la inmovilidad de la suma?

**Sr. Insúa.** — Así es, señor presidente.

**Sr. Presidente (Busacca).** — Tiene la palabra el señor diputado Díaz Ortiz.

**Sr. Díaz Ortiz.** — Es necesario tener en cuenta que ese valor debe estar referido al artículo 96, que determina precisamente la forma en que serán elaborados los índices de actualización a que se refieren diversos artículos que han establecido montos fijos.



En consecuencia, la preocupación del señor diputado Insúa debe desecharse.

**Sr. Rabanal.** — Lo que ocurre es que habría que señalar que este monto es reajutable y, además, en el artículo 96, debería agregarse el artículo 84 entre los que allí se enumeran.

En definitiva, el artículo 84 podría quedar redactado así: «En el supuesto de venta de uno o más inmuebles con el objeto de construir o adquirir una vivienda destinada a casa-habitación propia del contribuyente, podrá optarse, siempre que la valuación fiscal del nuevo inmueble no supere la suma de 150.000 pesos, la que será actualizada de acuerdo con el índice del artículo 96 de la presente ley, entre pagar el impuesto que resulte de la venta o afectar la utilidad obtenida, en la forma y condiciones que determine la reglamentación, al costo del nuevo inmueble».

**Sr. Díaz Ortiz.** — Considero innecesaria la referencia al artículo 96, porque en su texto —entre los que menciona— incluiríamos el artículo 84, con lo que ya quedaría solucionada la cuestión, y además se simplifica la redacción del artículo.

**Sr. Presidente (Busacca).** — Tiene la palabra el señor diputado García.

**Sr. García.** — Señor presidente: yo en alguna forma objetaría la redacción que propone el señor diputado Rabanal. El supuesto de venta de una vivienda contenido en la primera parte del artículo 84 puede llegar a comprender el caso de una persona que posea más de un inmueble. Por eso entiendo que debe aclararse que esta posibilidad está solamente referida al caso de que se trate de la vivienda única. No tenemos por qué proteger a un contribuyente que tenga varias propiedades.

**Sr. Presidente (Busacca).** — A fin de aunar criterios sobre el particular, la Presidencia invita a la Honorable Cámara a pasar a un breve cuarto intermedio sobre las bancas.

—Luego de unos instantes:

**Sr. Presidente (Busacca).** — Continúa la sesión.

Tiene la palabra el señor diputado Díaz Ortiz.

**Sr. Díaz Ortiz.** — Señor presidente: el nuevo texto que se propone para la primera parte del artículo 84 es el siguiente: «En el supuesto de venta de uno o más inmuebles con el objeto de construir o adquirir una vivienda destinada a casa-habitación propia y única del contribuyente podrá optarse, siempre que la valuación fiscal del nuevo inmueble no supere el monto de 200.000 pesos, entre pagar el impuesto que resulte de la venta o afectar la utilidad obtenida, en la forma y condiciones que determine la reglamentación, al costo del nuevo inmueble. Este tope de valuación fiscal será actualizado conforme al artículo 96».

**Sr. Presidente (Busacca).** — Se va a votar el artículo 84 con la modificación que se acaba de leer.

—Resulta afirmativa.

—Sin observaciones, se votan y aprueban los artículos 85 y 86.

**Sr. Presidente (Busacca).** — En consideración el artículo 87.

Por Secretaría se va a dar cuenta de la proposición formulada por el señor diputado Sandler.

**Sr. Secretario (Rocamora)** — El señor diputado Sandler propone eliminar en el inciso c) del artículo 87 la referencia a los incisos e), f) y g) del artículo 20. Es decir, propone suprimir la expresión «incisos e), f) y g)».

**Sr. Presidente (Busacca).** — ¿Acepta la comisión?

**Sr. Díaz Ortiz.** — La comisión no acepta, señor presidente.

**Sr. Presidente (Busacca).** — Se va a votar el artículo 87.

—Resulta afirmativa.

—Sin observaciones, se votan y aprueban los artículos 88 a 94.

**Sr. Presidente (Busacca).** — En consideración el artículo 95.

Por Secretaría se va a dar cuenta de la modificación propuesta por el señor diputado Sandler.

**Sr. Secretario (Rocamora).** — El señor diputado Sandler propone suprimir del inciso e) la última parte, desde donde dice: «en los montos...».

**Sr. Presidente (Busacca).** — ¿Acepta la comisión?

**Sr. Díaz Ortiz.** — La comisión no acepta.

**Sr. Presidente (Busacca).** — Se va a votar el artículo 95.

—Resulta afirmativa.

**Sr. Presidente (Busacca).** — En consideración el artículo 96.

**Sr. Díaz Ortiz.** — Señor presidente: en el artículo 96 debe incluirse correlativamente el artículo 84.

**Sr. Presidente (Busacca).** — Así se hará, señor diputado.

Se va a votar, con la inclusión propuesta por el señor diputado Díaz Ortiz.

—Resulta afirmativa.

**Sr. Presidente (Busacca).** — En consideración el artículo 97.

Por Secretaría se dará cuenta de las modificaciones propuestas.

**Sr. Secretario (Rocamora).** — El señor diputado Mira propone substituir la escala propuesta por la comisión, por la formulada originariamente por el Poder Ejecutivo.

**Sr. Presidente (Busacca).** — ¿Acepta la comisión?

**Sr. Díaz Ortiz.** — No, señor presidente.

**Sr. Sandler.** — Pregunto a la comisión si acepta la modificación de las escalas.

**Sr. Presidente (Busacca).** — La comisión ha dicho que no acepta, señor diputado.

**Sr. Sandler.** — Pido entonces que se omita la lectura por Secretaría de la escala correspondiente y se inserte en el Diario de Sesiones.

**Sr. Presidente (Busacca).** — Si hay asentimiento, así se hará.

—Asentimiento (1).

**Sr. Presidente (Busacca).** — Se va a votar el artículo 97.

—Resulta afirmativa.

**Sr. Presidente (Busacca).** — En consideración el artículo 98.

Por Secretaría se va a dar cuenta de la proposición del señor diputado Mira.

**Sr. Secretario (Rocamora).** — El señor diputado Mira propone substituir en el primer párrafo del dictamen, donde dice «45 %» por «47 %» y, además, substituir en el tercer párrafo del dictamen, donde dice «29,5 %» por «32 %».

**Sr. Presidente (Busacca).** — ¿Acepta la comisión las modificaciones propuestas por el señor diputado Mira?

**Sr. Díaz Ortiz.** — La comisión no acepta, señor presidente.

**Sr. Presidente (Busacca).** — Se va a votar el artículo 98.

—Resulta afirmativa.

—Sin observaciones, se votan y aprueban los artículos 99 a 101.

**Sr. Presidente (Busacca).** — En consideración el artículo 102.

Por Secretaría se va a dar lectura de un agregado que propone el señor diputado Mira.

**Sr. Secretario (Rocamora)** — Consiste en agregar: «previo acuerdo del Congreso Nacional», después de las palabras «podrá autorizar».

**Sr. Presidente (Busacca).** — ¿Acepta la comisión el agregado propuesto?

**Sr. Díaz Ortiz.** — La comisión no acepta, pero quiero formular una aclaración.

De acuerdo con la ley de inversiones extranjeras hay cierto tipo de contratos de inversión

que por las características de su monto e importancia deben ser aprobados por el Poder Legislativo, de modo tal que el pedido del señor diputado Mira queda satisfecho de alguna manera.

**Sr. Presidente (Busacca).** — ¿Insiste el señor diputado Mira en su proposición?

**Sr. Mira.** — Entiendo que lo que dice el señor diputado Díaz Ortiz se refiere a las inversiones. El agregado que formulo está planteado en relación con las exenciones de impuestos. Estimo que tenemos que legislar con vistas al futuro y, en lo que respecta a esta materia de exenciones impositivas, por todo lo que ha ocurrido en épocas recientes, es importante que sea el Parlamento el que dé su opinión y aprobación.

**Sr. Presidente (Busacca).** — Tiene la palabra el señor diputado Rabanal.

**Sr. Rabanal.** — Señor presidente: nuestro bloque no había formulado observaciones a este artículo en la inteligencia de que se había enfocado este problema, como bien lo dijo el señor diputado Díaz Ortiz, al sancionarse la ley de inversiones extranjeras. De acuerdo con esta norma las inversiones se concretarán a través de contratos de inversión individuales, que deberán ser aprobados por el Poder Ejecutivo, salvo en los casos que se denominan «de capital extranjero», es decir, cuando éste represente el 51 por ciento de la inversión, en los que debe ser el Parlamento el que apruebe el contrato de inversión.

Cuando en este artículo se habla de convenios internacionales relativos a la exención del impuesto sobre ganancias de personas o empresas extranjeras, resulta indudable que no podrá eximirse a esas ganancias más allá de lo que haya autorizado el contrato individual. Lo que se persigue es evitar el problema de la multiplicidad de imposiciones, que podría producirse en el caso de que no hubiera convenios de estas características.

Para conocimiento y tranquilidad personal del señor diputado Mira, diré que al analizarse la cuestión de la fuente y de los sujetos y objeto del impuesto, se tuvo fundamentalmente en cuenta el principio de que en ningún caso una exención puede significar un traslado de créditos impositivos al exterior. Este es el concepto con que se manejó el Poder Ejecutivo, que contó con la decidida aprobación de todos los sectores que integran la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

**Sr. Díaz Ortiz.** — Coincido plenamente con la aclaración del señor diputado Rabanal. De todos modos, voy a solicitar que pasemos a un breve cuarto intermedio para tener posibilidad de atender en forma más directa el pedido que formula el señor diputado Mira.

**Sr. Presidente (Busacca).** — Invito a la Honorable Cámara a pasar a un breve cuarto intermedio, con permanencia de los señores diputados en las bancas.

—Transcurridos unos instantes:

(1) Véase el texto de la inserción en el Apéndice.

**Sr. Presidente** (Busacca). — Continúa la sesión. Tiene la palabra el señor miembro informante.

**Sr. Díaz Ortiz**. — La comisión propone la siguiente redacción para el artículo 102: «Cuando se gestionen convenios internacionales relativos a la exención del impuesto sobre ganancias de personas o empresas extranjeras, el Poder Ejecutivo —a pedido de los interesados y mediante la garantía del caso y previa conformidad del Poder Legislativo— podrá autorizar a la Dirección General Impositiva la suspensión del cobro del gravamen de esta ley hasta tanto se resuelva en definitiva sobre tales gestiones».

**Sr. Presidente** (Busacca). — Tiene la palabra el señor diputado Rabanal.

**Sr. Rabanal**. — Quería hacer presente que habiendo colaborado en la redacción de este artículo entendemos, con la mayoría, que va a dar más seguridad.

**Sr. Presidente** (Busacca). — Se va a votar el artículo 102, tal como fue propuesto por el señor miembro informante.

— Resulta afirmativa.

— Sin observaciones, se votan y aprueban los artículos 103 a 105.

**Sr. Presidente** (Busacca). — En consideración el artículo 106.

Hay dos modificaciones propuestas: la primera presentada por el señor diputado Mira, que se va a leer por Secretaría.

**Sr. Secretario** (Rocamora). — Dice así: «Las disposiciones legales en vigor que, con fines de promoción regional o sectorial, otorgan o autorizan el otorgamiento de la exención o diferimiento del pago del impuesto a los créditos, no comprende la exención o el diferimiento de esta ley.»

«Quedan sin efecto, de ahora en adelante, todas las exenciones que se hayan otorgado previamente y que prácticamente importen la no aplicación del régimen de la presente ley. Todas ellas serán remitidas al Congreso Nacional para su revisión y resolución definitiva.»

**Sr. Presidente** (Busacca). — Tiene la palabra el señor diputado Mira.

**Sr. Mira**. — El motivo por el cual se propone esta redacción es similar al del artículo que recientemente hemos modificado. Queremos que sea el Parlamento nacional el que en definitiva autorice las exenciones que se han hecho sin previo acuerdo de este Congreso, manteniendo la potestad del Parlamento.

**Sr. Presidente** (Busacca). — ¿Acepta la comisión el texto propuesto?

**Sr. Díaz Ortiz**. — La comisión no acepta.

**Sr. Presidente** (Busacca). — Por Secretaría se leerá la otra modificación al artículo 106, que propone el señor diputado Gualco.

**Sr. Secretario** (Rocamora). — El señor diputado Gualco propone substituir el texto del ar-

tículo 106 por el siguiente: «Cuando con arreglo a regímenes que tengan por objeto la promoción sectorial o regional, sancionados con anterioridad al 25 de mayo de 1973, se hubieren otorgado tratamientos preferenciales en relación a los gravámenes que se derogan, el Poder Ejecutivo dispondrá los alcances que dicho tratamiento tendrá respecto del tributo que se crea por la presente ley, a fin de asegurar los derechos adquiridos y, a través de éstos, la continuidad de los programas aprobados con anterioridad a la sanción de la presente ley».

**Sr. Presidente** (Busacca). — Tiene la palabra el señor miembro informante.

**Sr. Díaz Ortiz**. — La modificación que propone el señor diputado Gualco introduce mayor claridad en el texto del artículo, pero, como miembro informante de la comisión desearía poner especial énfasis en la cuestión de los derechos adquiridos por quienes han realizado inversiones o han comenzado a realizar distintas tareas en las zonas promocionadas por los anteriores regímenes, en el sentido de que esos derechos deben ser respetados de forma tal que para quienes iniciaron sus actividades bajo un determinado régimen se les habilite para continuar gozando de esos beneficios promocionales.

**Sr. Presidente** (Busacca). — Se va a votar el artículo 106, en la forma propuesta por el señor diputado Gualco.

— Resulta afirmativa.

**Sr. Presidente** (Busacca). — En consideración el artículo 107.

Por Secretaría se dará lectura de una modificación propuesta por el señor diputado Gualco.

**Sr. Secretario** (Rocamora). — El señor diputado Gualco propone substituir el artículo 107 por el siguiente: «Cuando los regímenes a que hace referencia el artículo anterior, hubieran sido sancionados con posterioridad al 25 de mayo de 1973, el Poder Ejecutivo deberá reglamentar la aplicación automática de tales tratamientos preferenciales en relación al impuesto de la presente ley.»

«El tratamiento dispuesto precedentemente se aplicará al régimen instaurado por el decreto ley 19.640/72.»

**Sr. Presidente** (Busacca). — ¿Acepta la comisión la propuesta del señor diputado Gualco?

**Sr. Díaz Ortiz**. — Sí, señor presidente.

**Sr. Presidente** (Busacca). — Se va a votar el artículo 107 en la forma propuesta por el señor diputado Gualco.

— Resulta afirmativa.

**Sr. Presidente** (Busacca). — En consideración el artículo 108.

Por Secretaría se dará lectura de las observaciones formuladas.

**Sr. Secretario (Rocamora).** — El señor diputado Mira propone mantener el texto original del proyecto del Poder Ejecutivo, y el señor diputado Sandler propone eliminar el artículo 108.

**Sr. Presidente (Busacca).** — ¿La comisión acepta?

**Sr. Díaz Ortiz.** — La comisión no acepta ninguna de las dos observaciones.

**Sr. Presidente (Busacca).** — Se va a votar el artículo 108.

— Resulta afirmativa

— Sin observaciones. se votan y aprueban los artículos 109 y 110.

**Sr. Presidente (Busacca).** — En consideración el artículo 111.

Por Secretaría se dará lectura de una nueva redacción propuesta por el señor diputado Leopoldo M. Suárez.

**Sr. Secretario (Rocamora).** — El señor diputado Leopoldo M. Suárez propone una nueva redacción del artículo 111, que diría así: «Para la determinación de la materia imponible, cualquiera fuese el origen de la ganancia, serán deducibles las inversiones en nuevas plantaciones forestales o en la ampliación de las existentes y aquellas destinadas a incorporar a la producción agropecuaria tierras áridas o anegadas, mediante la obtención de aguas subterráneas o implementación de sistemas de riego o de evacuación de aguas y, complementariamente, las inversiones en trabajo de desmonte, rozaduras, nivelaciones, electrificación, implantación de cultivos permanentes, y sus gastos de mantenimiento, hasta tanto la explotación entre en período de producción. El acogimiento a este beneficio imposibilita el ejercicio de la opción del inciso c) in fine del artículo 68, e importa la nulidad de la exclusión del inciso a) del mismo artículo.

»Las inversiones antedichas podrán realizarse en forma directa o a través de integración de acciones, bonos, certificados o cualquier otro tipo de valores destinados a financiar las inversiones.»

**Sr. Presidente (Busacca).** — Tiene la palabra el señor diputado Leopoldo M. Suárez.

**Sr. Suárez (L. M.).** — Señor presidente: la nueva redacción del artículo 111 ha sido convenida con el sector de la mayoría en la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Vale la pena señalar cuál es la razón por la que se rompe una constante de la ley, de la que participamos, porque estamos de acuerdo con que no haya excepciones sino cuando estén realmente muy justificadas.

En este caso nos encontramos frente a dos problemas que son fundamentales para el país. Uno, la forestación y otro, la modificación de la situación económica en las provincias que tienen limitadas sus posibilidades en razón de no contar con precipitaciones pluviales suficientes

como para poder ampliar sus zonas de cultivo. Toda la región de Cuyo, La Rioja, Catamarca, Jujuy, Santiago del Estero, parte de Córdoba y algunas otras provincias tienen este problema. La única forma como se ha logrado aumentar las posibilidades económicas de esas provincias ha sido mediante la perforación y el uso de las aguas subterráneas.

Ha sido demostrativo el resultado obtenido con la desgravación, que ha producido mayores beneficios al país. Bastaría al respecto con reparar en la cantidad de hectáreas que se han puesto en posibilidades de cultivo en La Rioja. Como saben bien los señores diputados representantes de esa provincia, en Chilecito se ha transformado totalmente la economía regional por medio de las plantaciones que se realizan mediante la utilización de las aguas subterráneas. En Mendoza se ha aumentado de modo realmente extraordinario el número de hectáreas bajo cultivo con este mismo procedimiento, y esto está transformando también a Catamarca, así como abre grandes posibilidades a las provincias de Santiago del Estero y San Luis. Con respecto a esta última provincia, el gobierno de la Nación ha terminado hace pocos meses un estudio de todo el valle del Conlara, ofreciendo seguridades sobre los estudios realizados por técnicos alemanes y argentinos, de que puede transformarse la economía de la provincia de San Luis con la utilización de las aguas subterráneas en campos que actualmente son estériles y que a corto plazo pasarán a formar parte del sistema productivo argentino.

Con los fundamentos que dejo expuestos, propiciamos esta nueva redacción para el artículo 111, en consonancia con lo que la Honorable Cámara ha resuelto anteriormente respecto del artículo 51.

**Sr. Presidente (Busacca).** — Tiene la palabra el señor diputado Gualco.

**Sr. Gualco.** — Voy a apoyar la proposición del señor diputado Suárez, sobre todo porque las tierras áridas estaban desgravadas hasta ahora, y si no las incluyésemos en esta ley quedarían de hecho gravadas en el futuro.

A propósito de la provincia que representa el señor diputado Suárez, quiero recordar que en Mendoza sólo había 250 mil hectáreas bajo cultivo, superficie a la que se incorporaron 200 mil hectáreas que fueron tomadas de las tierras áridas; vale decir, que la superficie bajo cultivo alcanza en la actualidad a 450 mil hectáreas, y ahora se abre la posibilidad de agregar un millón de hectáreas más.

Por otro lado, toda esta cuestión tiene un gran significado federalista. Hace quince días, el diario «Los Andes», de Mendoza, decía en un gran titular: «Triunfó la pampa húmeda», y evidentemente está afectado el federalismo cuando, como recordaba el señor diputado Suárez, zonas de gran importancia y de riqueza como las de Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero no

pueden, por falta de agua, hacer producir tierras que por su composición son fértiles.

En Mendoza, una hectárea de tierra árida representa un valor de 400 mil pesos viejos; la puesta en condiciones, con alambrados, insume unos 650 mil pesos, y el costo del riego asciende a 720 mil pesos, todo lo cual da un valor de 1.700.000 pesos. Por el otro lado, la hectárea en condiciones de cultivo, con riego —si es que se puede comprar—, vale de dos millones a dos millones y medio de pesos.

Si el gobierno nacional quiere ampliar las fronteras agrarias del país, debemos crear los instrumentos para que el proceso pueda llevarse a cabo en la mejor forma posible, a fin de que el aumento de la producción agropecuaria nos permita el despegue que el país reclama. Hoy más que nunca, frente a los precios internacionales a que se están vendiendo los productos primarios y a la falta de proteínas y de alimentos en el mundo, es menester acelerar el proceso de ampliación de nuestras fronteras agrarias, para que no sigamos quejándonos de que dicha frontera surgió a través del tendido del ferrocarril. Por medio de esta cláusula de desgravación se hace posible montar un programa de incorporación de tierras para cultivo al margen del ferrocarril. Nuestro gobierno sabe lo que quiere y quiere ayudar a los que desean trabajar la tierra.

**Sr. Presidente (Busacca).** — ¿Acepta la comisión la modificación propuesta por el señor diputado Suárez?

**Sr. Díaz Ortiz.** — La comisión la acepta, por supuesto; pero desearía agregar una breve consideración.

Sobre los argumentos contundentes expuestos por los señores diputados Suárez y Gualco aletea lo que en su momento se dispusiera sobre la necesidad de aumentar la productividad agraria del país. Es indudable que este objetivo, claramente fijado por el señor presidente de la Nación, no se puede lograr si no es ampliando efectivamente los predios y los lugares aptos para la realización de mayores y mejores obras agropecuarias.

En ese sentido, las expresiones de los señores diputados Suárez y Gualco vienen a ser ratificadas con anterioridad por esas palabras del general Perón que expresamente quiero traer a la memoria de los señores diputados.

**Sr. Presidente (Busacca).** — Tiene la palabra el señor diputado Humberto F. Suárez.

**Sr. Suárez (H.F.).** — Deseo, señor presidente, que se vuelva a leer la redacción propuesta por el señor diputado Leopoldo Suárez.

**Sr. Presidente (Busacca).** — Por Secretaría se va a dar lectura del texto del artículo 111 propuesto por el señor diputado Leopoldo M. Suárez.

**Sr. Secretario (Rocamora).** — Dice así: «Artículo 111. — Para la determinación de la materia imponible, cualquiera fuese el origen de la

ganancia, serán deducibles las inversiones en nuevas plantaciones forestales o en la ampliación de las existentes y aquellas destinadas a incorporar a la producción agropecuaria tierras áridas o anegadas, mediante la obtención de aguas subterráneas o implementación de sistemas de riego o de evacuación de aguas y complementariamente las inversiones en trabajo de desmonte, rozaduras, nivelaciones, electrificación, implantación de cultivos permanentes, y sus gastos de mantenimiento, hasta tanto la explotación entre en periodo de producción. El acogimiento a este beneficio imposibilita el ejercicio de la opción del inciso c) *in fine* del artículo 68, e importa la nulidad de la exclusión del inciso a) del mismo artículo.

«Las inversiones antedichas podrán realizarse en forma directa o a través de integración de acciones, bonos, certificados o cualquier otro tipo de valores destinados a financiar las inversiones.»

**Sr. Presidente (Busacca).** — Si no se formulan observaciones, se va a votar el artículo 111 en la forma leída por Secretaría.

— Resulta afirmativa.

— El artículo 112 es de forma.

**Sr. Presidente (Busacca).** — Queda sancionado el proyecto de ley (1).

Se comunicará al Honorable Senado.

— Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 2º de la Honorable Cámara, doctor Isidro J. Odena.

## 2

### VIOLACION DE LOS PRIVILEGIOS PARLAMENTARIOS

Dictamen de la comisión (2) (3)

Honorable Cámara:

La Comisión de Asuntos Constitucionales ha considerado la cuestión de privilegio planteada por el señor diputado Busacca en la sesión del 5 del corriente; y, por las razones expuestas en el informe que se acompaña y las que dará el miembro informante, aconseja la sanción de los siguientes

## I

### Proyecto de declaración

La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Que las expresiones verbales vertidas por el agente de la Policía Federal Oscar Ignacio Peter —chapa número 13.977—, en ocasión del pro-

(1) Véase el texto de la sanción en el Apéndice.

(2) Artículo 90 del reglamento.

(3) Autorizado por resolución de la Honorable Cámara del 5 de diciembre de 1973.